
	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

## ALERTA TEMPRANA N° 036-19

Fecha: 2 de septiembre de 2019

### LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana		Zona Rural	
		Cabecera, Localidad o Zona	Barrios	Corregimiento	Veredas
Antioquia	Bello	Comuna 4 - Suárez	Central, Pérez, La Meseta, Andalucía, López de Mesa, El Cairo, La Milagrosa, El Congolo, Las Granjas, Prado, Manchester, La Estación	San Félix	El Carmelo, Jalisco Los Álvarez, Sabana Larga, Charco Verde, La China, La Palma  Potrerito La Primavera, Tierradentro, Quitasol, Granizal
		Comuna 6 Bellavista	Bella Vista, Playa Rica, San Gabriel, San Martín, Villas del Sol, Tierra Adentro, Villa Linda, Girasoles, Pachelly, Los Altos, El Ducado, La Aldea, La Selva.		
		Comuna 7 Altos de Niquía	El Mirador, Altos de Niquía, Altos del Quitasol, Niquía Bifamiliares.		
		Comuna 8 Niquía	Ciudad Niquía, Panamericano, Ciudadela del Norte y Terranova		

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

## POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

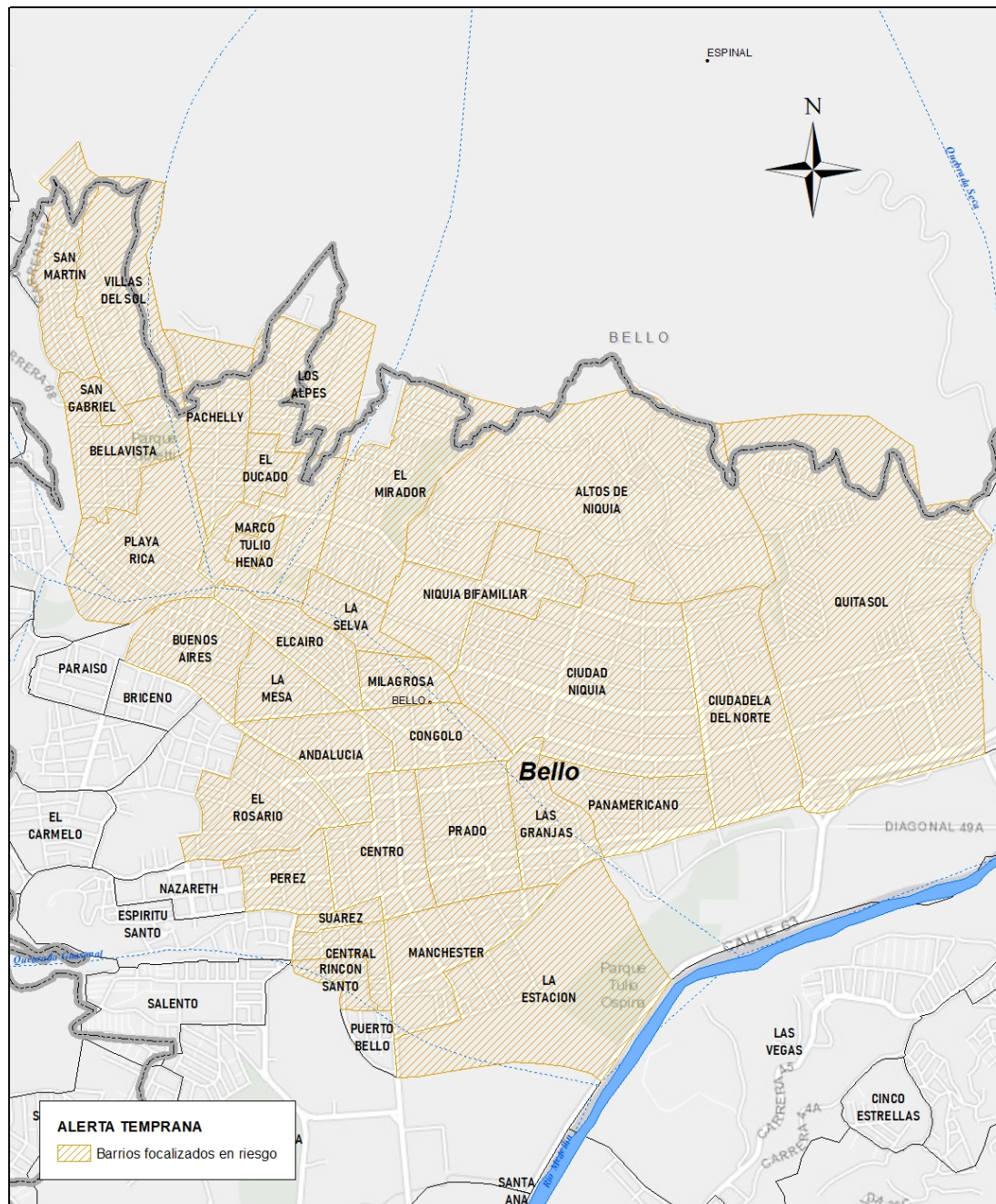
Indígenas	<input type="checkbox"/>	Afrocolombianos	<input type="checkbox"/>	Otra población civil	<input checked="" type="checkbox"/>
Sexo	Femenino: 253.975. Masculino: 237.207		Cantidad aproximada	491.182 personas	
Grupos sociales vulnerables	Niños, niñas y adolescentes; defensores/as de Derechos Humanos; líderes comunales y sociales; docentes; mujeres; población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD); víctimas del conflicto armado; habitantes de barrios periféricos; empresas.				
Condición social y/o actividad	Transportadores (Taxistas); comerciantes; mensajeros/as; candidatos/as a corporaciones públicas; poblaciones socialmente estigmatizadas; población en situación de desplazamiento forzado; líderes/as y defensores/as de Derechos Humanos; familiares de personas señaladas como supuestos integrantes de las organizaciones armadas ilegales; empresas del sector inmobiliario formal.				

**Identificación de población en situación de riesgo:**






La población en riesgo se encuentra localizada principalmente en el casco urbano del municipio de Bello, en particular en los barrios ubicados en la Comuna 4 - Suárez, Comuna - 6 Bellavista, Comuna 7 - Altos de Niquía y la Comuna 8 - Niquía, así como en los asentamientos no formalizados conformados en su mayoría por población víctima de la violencia de Granizal y Nuevo Jerusalén, en zona rural del municipio

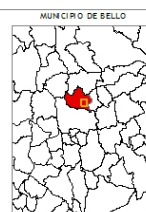
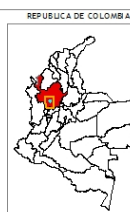
La población afectada por la confrontación violenta actual habita en los barrios adyacentes a la denominada "centralidad del Norte del Valle de Aburrá". Se trata de una población de clase de media, aunque en principio las autoridades señalan como principal hecho victimizante el homicidio selectivo y como principales víctimas supuestos integrantes de los grupos armados ilegales en confrontación, la realidad es que esta disputa tiene un impacto directo sobre la población civil de los barrios de las comunas mencionadas anteriormente, representados en homicidios selectivos, interposición de población civil en confrontación armada, heridos por atentados y balaceras indiscriminadas, desplazados forzosamente, niños, niñas y adolescentes reclutados y/o utilizados, amenazas, entre otras conductas que registran afectaciones directas sobre la población civil de este territorio del municipio de Bello.

## ALERTA TEMPRANA

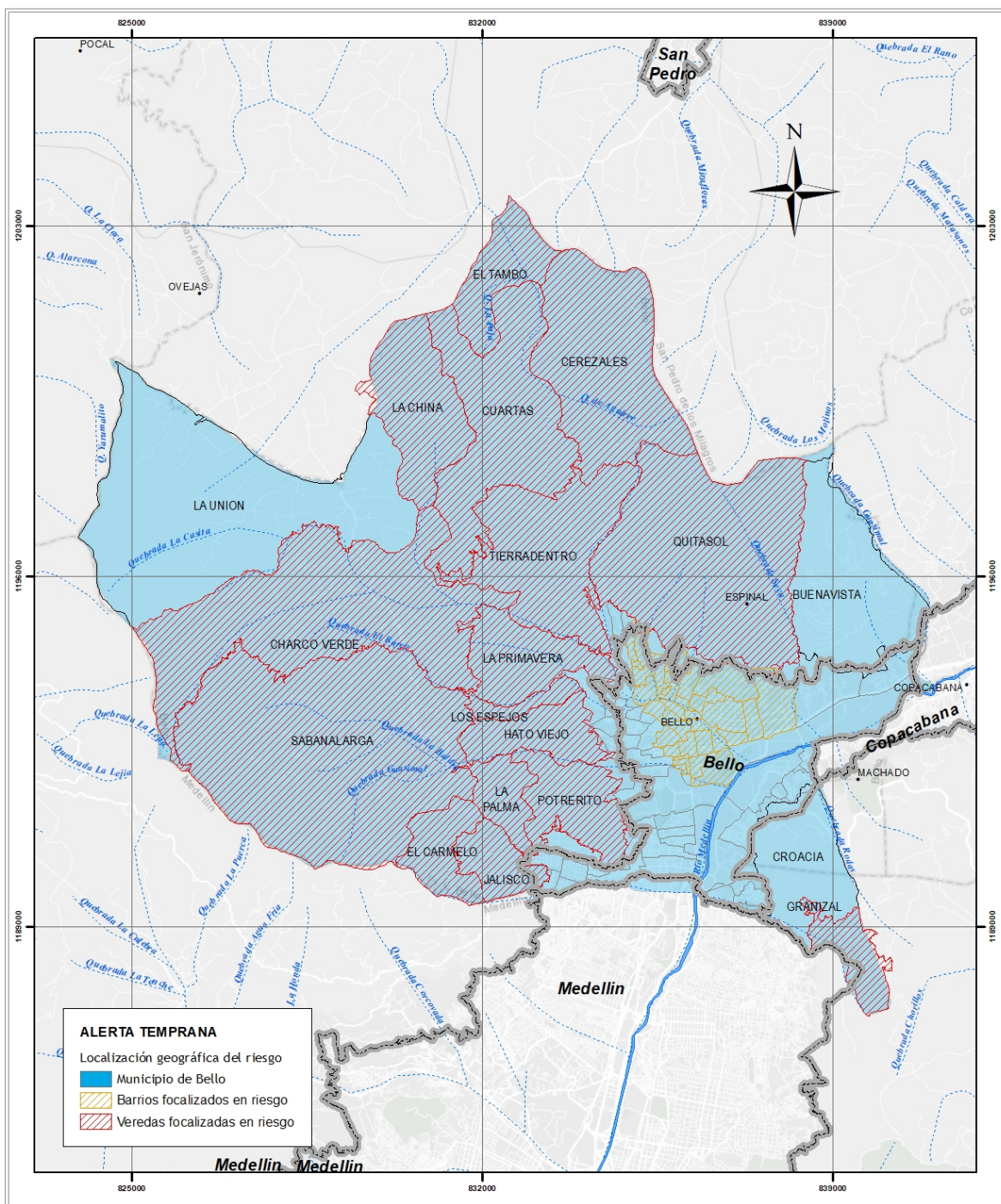


### CONVENCIONES

-  Perímetro urbano Medellín
-  Drenaje Doble
-  Barrios
-  Límite Municipal
-  Ríos







### Localización Geográfica del Riesgo

ALERTA TEMPRANA  
Nº 036.19

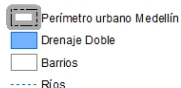
Departamento: An


Municipio: Bello

Base IGAC - Área metropolitana Valle de Aburrá  
Sistema de Coordenadas: Magna  
Origen Bogotá

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN  
DE RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS  
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL  
HUMANITARIO SISTEMA DE ALERTAS  
TEMPRANAS - SAT

## CONVENCIONES



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

## DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

### 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO


El escenario de riesgo actual se observa a partir de las vulneraciones a los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el municipio de Bello durante el presente año, y se determina a partir de la dinámica de diversos grupos y estructuras armadas ilegales que, después de casi una década de acuerdos en la repartición del control territorial y de las rentas ilícitas derivadas a partir de estos, han quebrantado sus pactos de control en lo local. A estos actores se suman también: organizaciones ilegales que se encuentran en proceso de escisión, debido a la insubordinación de algunos mandos medios; el fortalecimiento de la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en algunos sectores del municipio, así como la influencia de grandes estructuras de crimen organizado provenientes de otros países, contexto que supone cruentas disputas sobre el territorio, sus corredores de movilidad y las economías ilegales que allí se desarrollan.

En todas las comunas y en la mayoría de las veredas que conforman el municipio de Bello, históricamente ha existido presencia de diversos actores armados ilegales. Desde hace más de quince (15) años, se estableció un pacto de distribución de la presencia y/o control territorial de las diferentes estructuras armadas ilegales que han estado interesadas en ejercer dominio sobre este municipio. Desde entonces, predominó el “respeto” de las fronteras pactadas entre estos actores y con ello, la hegemonía de cada uno en el respectivo territorio controlado, algo que permitió el mantenimiento de índices relativamente bajos de victimización, gracias a la ausencia de confrontación y la autonomía de cada organización en la derivación de rentas ilegales, la participación en negocios legales y el establecimiento de alianzas en diferentes circuitos económicos, incluso en nuevos territorios.

Estos elementos permitieron que, durante los últimos tres lustros, la ocurrencia de hechos victimizantes fuera relativamente baja en Bello. Por ejemplo, para 2018, según datos de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), ubicaban a Bello con un Índice de Riesgo de Victimización (IRV) ponderado en “Medio-Bajo”, con un puntaje de 0,13089. Vale anotar que la medición de este indicador oscila en un rango de 0 a 1, siendo los valores más cercanos a 1 aquellos que demostrarían un mayor riesgo de victimización, calculado este a partir de mediciones de amenaza y vulnerabilidad<sup>1</sup>.

Sin embargo, el inicio del año 2019 parece marcar un punto de quiebre en dicho escenario de pactos de repartición del territorio y de rentas entre las estructuras armadas ilegales de Bello. A partir de entonces, se han registrado diversas acciones violentas que comenzaron a configurar un escenario de conflictividad y disputa armada que, paulatinamente, ha devenido en un incremento significativo de homicidios múltiples y selectivos; desplazamientos forzados individuales inter e intraurbanos; enfrentamientos

<sup>1</sup> Cfr. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, *Índice de Riesgo de Victimización 2016-2018*, Bogotá, 2019, p. 7.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

con armas largas con interposición de población civil, amenazas colectivas por medio de panfletos y redes sociales, amenazas individuales, restricciones a la movilidad, reclutamiento uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA), constreñimiento a la libertad, extorsiones, otras rentas ilegales, como principales conductas vulneratorias de los derechos humanos, de los territorios advertidos en la presente Alerta Temprana.

Tal contexto de ruptura y de graves vulneraciones a los DDHH se encuentra en la actualidad altamente focalizado en zonas de control tradicional de la estructura armada ilegal autodenominada Pachelly, y de otras que, hasta hace pocos meses, eran consideradas como sus supuestas aliadas al interior de la denominada Oficina del Valle de Aburrá: El Mesa y Niquía Camacol. Lo anterior comprende varios barrios de las comunas Bellavista - 6, Altos de Niquía -7, Niquía - 8 y, en menor medida, de algunos sectores de la Comuna Suarez -4.


Si bien estas comunas son las que registran el mayor incremento en hechos victimizantes -como se verá más adelante-, el escenario de riesgo se podría ampliar a otros territorios adyacentes, pues los pactos entre este tipo de grupos ilegales son muy inestables. En consecuencia, se estima latente el riesgo de expansión de este conflicto a otros territorios, tanto en el municipio de Bello como en otros de la región y el país, en donde se presume que ya existe presencia de estructuras armadas ilegales provenientes de este municipio.

Cabe resaltar que la confrontación violenta entre las estructuras armadas ilegales con asiento en Bello parece originarse en una división al interior de la organización autodenominada Pachelly. Durante los últimos tres lustros, esta estructura ha incrementado su participación en los negocios ilegales que tienen lugar en otros territorios, lo que habría motivado a sus principales jefes a entregar mayores responsabilidades a los mandos medios, para mantener el control en el ámbito local y, en consecuencia, se han visto forzados a establecer alianzas con otras estructuras ilegales que en su momento eran de menor poder y trascendencia regional, como El Mesa y Niquía Camacol, con el propósito de ampliar los negocios en otras zonas, dentro y por fuera del Valle de Aburrá.

En principio, parecería que solo se trata de una confrontación entre integrantes de la línea tradicional de Pachelly, contra una disidencia que controla los barrios bajos de Niquía, y que estaría aliada al Mesa y a Niquía Camacol. Pero en el trasfondo, esta confrontación se podría expandir a una escala regional a más de quince (15) municipios de Antioquia en donde hay presencia de estructuras de Bello y a otros sectores del centro del país como Bogotá D.C. y Soacha, tal y como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo desde el año 2017<sup>2</sup>.

Tal probabilidad de expansión de la dinámica de violencia y sus correlativos escenarios de riesgo de vulneraciones de Derechos Humanos, a nivel subregional y nacional, se sirve también de la presunta influencia de otros actores ilegales de alcance transnacional que

<sup>2</sup> Al respecto, se sugiere consultar los siguientes documentos de advertencia emitidos por la Defensoría del Pueblo - SAT: 1) *Nota de Seguimiento No. 008-17 para Soacha, Cundinamarca*; 2) *Alerta Temprana de Inminencia No. 030-18 para Ciudad Bolívar, Bogotá*; 3) *Alerta Temprana No. 086-18 para Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal en Bogotá* y 4) *Alerta Temprana No. 023-19 para Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy en Bogotá*.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

participan del negocio internacional del narcotráfico, aspecto que complejizaría -aún más- la situación humanitaria de las poblaciones que habitan estos territorios. Dichos actores han establecido acuerdos con los grupos y estructuras armadas ilegales con asiento en Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá, incidiendo directamente en las tendencias de la disputa y en los rigores que estas suponen para los habitantes de los barrios y veredas sobre los cuales se despliegan las respectivas pugnas. Aunque las estructuras internacionales no ejercen control territorial ni aportan combatientes, el dinero y las armas que inyectan a las organizaciones locales contribuye al escenario de desestabilización de la convivencia entre los grupos armados ilegales presentes en Bello.

Por lo anterior, la hipótesis de riesgo, en caso de mantenerse el actual contexto de amenaza entre actores armados ilegales en Bello, se debe plantear en tres niveles: el local, el regional - nacional y el transnacional:


***Escenario de Riesgo local:*** Si bien el contexto de vulneraciones a los derechos humanos se percibe con mayor intensidad en las comunas señaladas, a nivel local no se descarta la posibilidad de que dicho escenario se exacerbe -aún más- debido a la eventual participación de otras estructuras armadas ilegales en la disputa, que aún no forman parte de la confrontación. Se trata puntualmente de estructuras que tienen control sobre otros sectores de Bello tales como Los Chatas -procedentes de este mismo municipio- o Los Triana, San Pablo y Oficina del Doce de Octubre, estos últimos procedentes de Medellín. A estas se sumarían otras organizaciones aliadas de menor capacidad.

El riesgo a nivel local, por tanto, podría profundizarse ante la eventual participación de esas estructuras en la confrontación violenta, y con ello la adscripción a uno de los bandos en contienda, con la respectiva expansión del escenario de vulneración de los DDHH a otras zonas que aún no han sido afectadas en la misma dimensión de las comunas referidas en riesgo.

Adicionalmente, y tal como se expondrá en detalle más adelante, el riesgo a nivel local también se fundamenta en factores territoriales de vulnerabilidad, que se derivan de intereses sobre el suelo urbano y sus usos. Se estima que varias de dichas estructuras armadas ilegales han captado una importante renta a partir del mercado inmobiliario y la especulación de los usos del suelo en Bello, tanto de la venta ilegal de lotes en terrenos no legalizados, como de exacciones a los constructores formales. Por esa razón, el vencimiento de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bello, en el 2021, constituye un factor de vulnerabilidad adicional en varias zonas, que pueden representar un interés particular de expansión en el control por parte de actores armados ilegales. En otras palabras, se trata de otro factor que puede ampliar la confrontación a nuevos territorios, dentro del municipio de Bello.

***Escenario de riesgo regional - nacional:*** Pese a tratarse de dinámicas de violencia primordialmente urbanas, es importante anotar que los procesos de recomposición, ruptura de acuerdos ilegales y reacomodo estratégico de los actores y estructuras armadas al interior de este municipio han expresado las tensiones que también ocurren en otras subregiones del departamento y del país. La presencia de estructuras armadas ilegales provenientes de Bello se identifica en municipios de otras subregiones de Antioquia, como:



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Valle de Aburrá, Norte, Nordeste, Suroeste y en otros departamentos y ciudades y departamentos como Cundinamarca, Sucre, Risaralda, Caldas, Cauca, Boyacá, Bogotá, Soacha entre otros. De allí que exista un alto nivel de probabilidad de que las tendencias del conflicto urbano que se vive en Bello se trasladen a estos territorios, provocando un incremento en hechos victimizantes, tal como se registra en el primer semestre del presente año en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Este escenario se complejiza más con el tipo de alianzas que algunas estructuras como “la disidencia de Pachelly”, El Mesa y Niquía Camacol, parecieran construir con grupos armados ilegales que operan en el ámbito regional y nacional, como el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, y la disidencia de las AGC autodenominada Bloque Virgilio Peralta Arenas, reconocidos popularmente como Caparrapos o Caparros por la Fuerza Pública, tal como se detallará en el acápite de valoración del riesgo.


*Escenario de riesgo trasnacional:* entre los años 2011 y 2017, la participación de las estructuras armadas ilegales de Bello en el mercado internacional de la cocaína estuvo demarcada por la hegemonía de las AGC en la región antioqueña, como proveedor del clorhidrato de cocaína procesado para el mercado internacional, y como único comprador de esa droga el Cartel de Sinaloa, que introducía ese producto en el norte del continente. Pero como se detallará más adelante, hay otros capitales ilegales extranjeros que han estado interesados en desestabilizar tal hegemonía, circunstancia que viene dividiendo las organizaciones armadas ilegales que derivan rentas internacionales del narcotráfico en dos bandos.

Aunque esta circunstancia no está plenamente verificada por el SAT en Bello, existen indicios de que, en este territorio, al igual que en municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueños, Sur de Córdoba y Medellín estarían consolidándose dos bandos alrededor de dos carteles mexicanos que se disputan el control de toda la cadena de producción y comercialización internacional de este tipo de narcóticos, a saber, los Carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta ruptura desde Bello puede generar el escalamiento de la violencia en zonas de producción de cultivos ilícitos, como en rutas de movilidad de mercancías ilegales, siendo el occidente de este municipio un lugar fundamental para la movilización de la ilegalidad entre el noroccidente y el suroccidente del país.

La coexistencia de estos niveles de riesgo -en lo local, lo regional y lo transnacional-, en consecuencia, prevé advertir un alto nivel de probabilidad de continuación y exacerbación de graves violaciones a los Derechos Humanos y/o infracciones al DIH, expresadas en: Desplazamientos forzados (individuales y masivos) tanto inter como intraurbanos; homicidios en persona protegida (de configuración múltiple y selectiva); desapariciones forzadas; torturas; utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil; violencia sexual; enfrentamientos con interposición de la población civil; reclutamientos forzados y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes (NNA).

También es factible el incremento de riesgos para el ejercicio de los derechos y libertades políticas, a medida que se acerque el desarrollo de los comicios locales del mes de octubre de 2019. La profundización de la dinámica de amenaza y disputas por el control territorial en Bello, entre grupos y estructuras armadas de diverso alcance, sin duda supondrán serias



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

limitaciones a las labores proselitistas, a la libre circulación de candidatos/as y al desarrollo de otras acciones vinculadas con ese proceso por parte de líderes/as sociales y otros sectores poblacionales que respalden o acompañen las actividades pre-electorales, como población excombatiente en proceso de reincorporación, candidatos/as y colectividades que acompañen actividades proselitistas, entre otros.

En consecuencia, la salvaguarda de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la población civil, de sus libertades civiles y políticas y la prevención de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en este municipio demandan acciones institucionales de prevención y protección que adopten como criterio orientador de su gestión el respeto y la salvaguarda de los Derechos Humanos, y la debida diligencia de todas las autoridades.

En consecuencia, conviene a la acción institucional adoptar un enfoque de “seguridad humana” en sus intervenciones, que asegure la plena vigencia del Estado Social de Derecho en las jurisdicciones urbanas y rurales del municipio objeto de advertencia. Como bien ha referido el Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas “(...) *ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos. Esa relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso*”<sup>3</sup>.

Por lo tanto, las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo al final de la presente Alerta no se restringen al refuerzo de las acciones institucionales de disuasión - con pleno arreglo al respeto de los DDHH-; antes bien, se entiende que, para lograr una efectiva prevención de los diversos escenarios de riesgo, se precisa de una sostenida intervención estatal mediante la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad que posibilitan tal escenario de riesgo y del fortalecimiento de los factores institucionales y comunitarios de protección en el municipio de Bello que permiten afrontar dichos escenarios.

## 2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO

ELN


☒

OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES:

Grupos Armados Ilegales post desmovilización de las AUC: Oficina del Valle de Aburrá “antes de Envigado” y algunas de sus posibles estructuras de crimen organizado Pachelly, El Mesa, Niquía Camacol, Los Chatas, Oficina del Doce de Octubre.

Otras estructuras independientes o aliadas como Los Triana, El Tapón y El Mirador, y otras organizaciones locales al servicio de las anteriores.

<sup>3</sup> Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

### 3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.

- ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, tortura, homicidio selectivo, homicidio múltiple, violencia sexual).
- AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES BÉLICAS (enfrentamientos con interposición de la población civil).
- UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA POBLACIÓN CIVIL (Amenazas mediante panfletos, abordajes directos, llamadas o mensajes telefónicos).
- DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL
- RECLUTAMIENTO, USO Y/O VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

### 4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS

- A LA VIDA.
- A LA INTEGRIDAD PERSONAL.
- A LA LIBERTAD PERSONAL.
- LIBERTADES CIVILES: A LA LIBRE CIRCULACIÓN, A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA, A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE, A LA LIBRE ASOCIACIÓN.
- LIBERTADES POLÍTICAS: A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL DEL PODER POLÍTICO.

## VALORACIÓN DEL RIESGO

### I. CONTEXTO TERRITORIAL Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Bello se localiza en el departamento de Antioquia, al norte de la subregión metropolitana del Valle de Aburrá. El municipio cuenta con una extensión total de 142,36 Km<sup>2</sup>, de los cuales el área urbana ocupa 19,7 Km<sup>2</sup>, mientras 122,66 Km<sup>2</sup> corresponden suelo rural<sup>4</sup>. El área urbana se encuentra conurbada completamente al sur con el municipio de Medellín y al norte con el municipio de Copacabana. Su ubicación geográfica le permite ocupar un lugar importante en la movilidad vial nacional, en tanto que por la Autopista Norte y la Avenida Regional circula cerca de una cuarta parte del transporte de carga nacional y, por tanto, es la vía preferente para la movilidad de la mercancía entre los puertos del Caribe y el puerto de Buenaventura en el océano Pacífico.

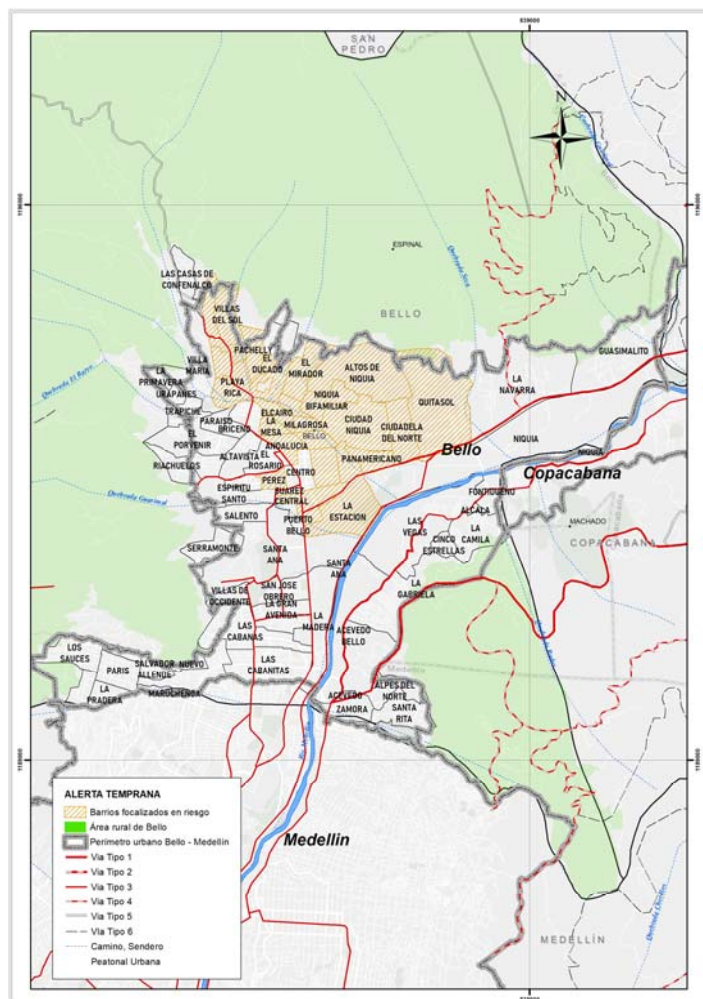
En sus cotas más altas, Bello también cuenta con vías secundarias y terciarias, que configuran corredores estratégicos de movilidad para los actores armados ilegales: Por el occidente, se encuentra la vía que conduce de Pajarito (corregimiento de San Cristóbal de Medellín) hacia el corregimiento de San Félix (Bello); esta, a su vez, permite la movilidad entre el Urabá y el Norte y Bajo Cauca antioqueños en dirección hacia la Troncal de la Costa Atlántica. Esta vía alterna pasa por los municipios lecheros de San Pedro de Los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos, hasta confluir en esta importante troncal.

Por su parte, por el oriente, la vereda de Granizal se encuentra ubicada sobre la antigua carretera a Guarne, lo que posibilita una ruta de movilidad hacia el oriente del

<sup>4</sup> Alcaldía de Bello, Secretaría de Planeación. Anuario estadístico de Bello 2018. Bello, octubre de 2018.

## ALERTA TEMPRANA


departamento y con ello hacia el aeropuerto internacional y el centro del país. Mientras la primera es una ruta internacional, utilizada por la ilegalidad para el movimiento de mercancías ilícitas, la segunda es usada como ruta nacional para esos mismos fines.



Elaboración del SAT

El poblamiento urbano de mayor concentración tiene lugar en la cabecera de Bello. Esta se ubica en un suelo inclinado que desciende de los 1.600 hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar<sup>5</sup>, en dirección al cauce del río Medellín, y desde allí se ha ido ocupando la rivera sobre la margen oriental de este río en la última década. La zona rural, con cotas que van por encima de los 1.980 metros, tiene pendientes altamente inclinadas. Debido a ello, la ocupación de fincas y el nivel de población rural es relativamente menor en relación porcentual a la ocupación del suelo en la zona urbana, salvo los asentamientos informales que están por fuera del perímetro urbano.

<sup>5</sup> Ibíd.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

No por efecto de la planeación sino del conflicto armado, las veredas de Granizal y Potrerito presentan un alto grado de concentración demográfica, principalmente de víctimas de desplazamiento forzado de varios lugares del país que se han asentado en estos territorios, caracterizados por su carácter periférico, y con limitado acceso a la oferta institucional: según estimaciones de fuentes comunitarias y de la Alcaldía de Bello, en Granizal pueden habitar actualmente 24.000 personas y en Nuevo Jerusalén, o El Cortado, ubicado en la vereda de Potrerito, cerca de 18.000 habitantes. Serían entonces cerca de 50.000 personas, en 22 asentamientos, ubicados en suelo rural o semi urbano de Bello, mucho más de las 5.223 personas que el DANE registra como residentes rurales de ese municipio.

Ahora bien, conviene resaltar que los estimativos cuantitativos poblacionales del municipio de Bello suministrados por la Administración Municipal y líderes/as sociales entrevistados/as por la Defensoría del Pueblo difieren considerablemente de los cálculos poblacionales del DANE. Las proyecciones poblacionales de esa entidad, a partir del Censo de 2005, consideraban que, para el año en curso, residirían en Bello un total de 491.182 personas, de las cuales 237.207 son hombres (48,3%) y 253.975 mujeres (51,7%)<sup>6</sup>, una cifra muy parecida a la arrojada por el último Censo realizado, que identificó 481.901 habitantes, y que no le permite a Bello alcanzar el umbral de Categoría Especial y con ello el aumento de los recursos de participación en el Presupuesto General de la Nación.

De otra parte, es importante resaltar que las actividades económicas de Bello se concentran especialmente en los sectores financieros, de seguros, y actividades de servicios personales y sociales con cerca de un 50%. Le siguen la construcción con un 12%, la industria manufacturera con un 11% y empresas de transportes y comunicaciones con un 10%<sup>7</sup>, aspectos todos que posicionan al municipio como un importante epicentro económico urbano del departamento de Antioquia.

## II. CONTEXTO DE AMENAZA


### a. Antecedentes del contexto de amenaza

A diferencia de la vecina ciudad de Medellín, en Bello no hubo una presencia significativa de milicias populares insurgentes durante las décadas de 1980 y 1990. Si bien en este municipio hubo algunas actividades milicianas del ELN y del Ejército Popular de Liberación (EPL), estas se redujeron a una presencia militar en la periferia y a grupos de apoyo logístico en el casco urbano, lo cual denotaba, en todo caso, que para dichos grupos armados ilegales era importante conservar algún tipo de presencia -por marginal que fuera- en las periferias de este municipio y de Medellín. Desde entonces, sobrevive una célula del ELN en Altos de Niquía con la que coexisten los demás grupos armados, pero que no ostenta un control armado territorial, como se verá más adelante.

<sup>6</sup> Datos obtenidos de: DNP, *Terridata*, Disponible en: <https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/05088>, consultado 30/05/2019.

<sup>7</sup> *Ibíd.*



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Las bandas juveniles que se empezaron a constituir a finales de 1970 en Bello, para la década de los años ochenta -con el auge del negocio del narcotráfico- se transformaron progresivamente en las denominadas “oficinas de cobro” al servicio de organizaciones dedicadas a esa actividad ilegal como el Cartel de Medellín. Como ha referido el Centro Nacional de Memoria Histórica, las bandas sicariales subcontractadas en Bello y el norte de la ciudad de Medellín formaron parte de una estrategia de “territorialización local del crimen” implementada por dicho cartel<sup>8</sup>.

Desde entonces, en esta subregión se instauró una dinámica de violencia donde las diversas estructuras locales, de manera directa y/o mediante el asocio con diversas organizaciones ilegales -incluyendo grupos armados ilegales que participan del conflicto armado- han desempeñado un rol preponderante en las tendencias de la violencia y del conflicto armado en este territorio, con serias repercusiones sobre los derechos humanos de los/as habitantes de las comunas que conforman este y otros municipios de la subregión. Esto no habría sido posible sin su alta capacidad de adaptación y recomposición, independientemente de los cambios en las tendencias de la disputa, de los puntos de inflexión del conflicto armado a nivel regional y nacional y de las presuntas interacciones entre sectores legales e ilegales.

Tras la muerte de Pablo Escobar, tuvo lugar un proceso de reorganización de las estructuras armadas ilegales en todo el Valle de Aburrá, siendo la llamada Oficina de Envigado aquella que logró imponerse sobre las demás, gracias al establecimiento de alianzas con bandas ubicadas en sectores de Bello y otros municipios de la subregión y a la estructuración de una operación en red que, si bien contaba con algunas jerarquías, permitía que cada banda lograra cierta autonomía en su accionar<sup>9</sup>.


Se reconocen en particular los actos de terror perpetrados por la banda de “La Ramada”<sup>10</sup>, al servicio de la que entonces era conocida como “Oficina del patrón de Envigado”. Después del exterminio de esta banda, otras dos estructuras, surgidas a partir de finales de la década de 1980, comenzaron a controlar mayoritariamente el territorio de Bello: se trata de “Los Chatas” y “Los Pachelly”, estructuras armadas ilegales que aún siguen ejerciendo mayor influencia ilegal en este municipio, aunque no las únicas.

Durante la década de 1990, el narcotráfico y otras rentas ilegales, permitieron el fortalecimiento de estructuras como El Mesa, El Mirador, Niquía Camacol, El Tapón, La Camila, entre otras que aún perviven. A en este contexto se sumó la expansión de estructuras armadas ilegales provenientes de Medellín, de barrios limítrofes, pero con interés en controlar rentas ilícitas en sus vecinos de Bello, como Los Triana, San Pablo y la Oficina del Doce de Octubre, agrupaciones ilegales que aún ostentan un importante control sobre determinados sectores del municipio.

<sup>8</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica, *Medellín. Memorias de una guerra urbana*. CNMH-Corporación Región - Ministerio del Interior - Alcaldía de Medellín - Universidad EAFIT - Universidad de Antioquia, Bogotá, 2017.

<sup>9</sup> *Ibíd.*

<sup>10</sup> <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-208877>, Consultado 14/05/2019

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

A mediados de 1990, el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia era el actor que controlaba el territorio, el cual era importante para interrumpir la movilidad del ELN entre el Nororiente de Medellín y el oriente antioqueño.

Hasta el primer lustro del siglo XXI, estas estructuras armadas ilegales libraron diversos conflictos por el control territorial que cobraron muchas vidas y otros hechos victimizantes. Pero a partir del año 2005, comenzaron a construir un pacto de repartición del territorio, a través de un espacio denominado Mesa de Paz y Convivencia, que en su momento contaba con el aval de la Administración Municipal. El Acuerdo Municipal No. 012 de 2006 oficializó la Mesa, incluso le dio la posibilidad de contratar con la administración local proyectos de convivencia y paz, a través de corporaciones, algo que, aunque buscaba alcanzar una paz urbana en Bello no dejó de ser polémico en su momento. Así lo sugiere un informe de la Misión Electoral - MOE- de 2011, retomando una nota de prensa:


*"Algunos interpretan el Acuerdo 012 de 2006, expedido por ella, como el pago a favores de las bandas. Consiste en destinar el 0,5 por ciento del impuesto de industria y comercio, o sea de 600 a 700 millones de pesos anuales, para proyectos de las 12 corporaciones que lideran los representantes de los antiguos grupos delincuenciales que forman la Mesa de Paz y Convivencia (El Tiempo, 13 de abril de 2007)"<sup>11</sup>.*

El establecimiento de la Mesa coincidió temporalmente con el proceso de desmovilización de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, que operaron en el Valle de Aburrá y que respondían a un mismo jefe: Bloque Cacique Nutibara, Bloque Héroes de Granada y Bloque Cacique Tolová, el mismo que, después de estas desmovilizaciones, entre 2002 y 2005, se consolidaría como el jefe único de la conocida popularmente como "Oficina de Envigado", lo que representaba en su momento la dirección de toda la criminalidad organizada en el Valle de Aburrá.

La extradición a los Estados Unidos de América del máximo mando de la "Oficina de Envigado", en mayo de 2008, junto con otros 13 jefes de los bloques de las AUC por el delito de narcotráfico, provocó un vacío de poder que varios jefes de menor rango en la criminalidad intentaron llenar, pero después de varios desaparecidos, asesinados o capturados al interior de "La Oficina de Envigado", ésta se fracturó en dos bandos, que desataron una confrontación que cobró muchas vidas en el Valle de Aburrá entre 2009 y 2012, año de la captura de los principales incitadores de la confrontación por la jefatura máxima de la "Oficina de Envigado".

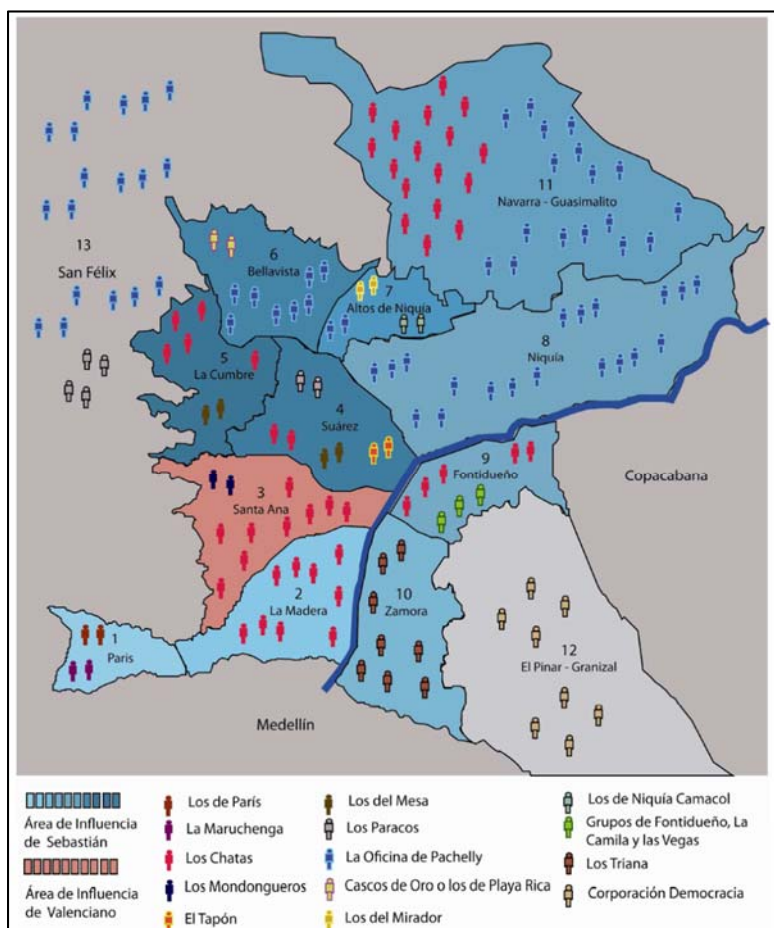
Pero en el municipio de Bello esta confrontación no tuvo un impacto significativo, ya que a partir de los pactos de distribución del territorio y de no agresión, desde el año 2005, las decisiones de las principales organizaciones ilegales presentes en Bello fueron concertadas entre ellas. Por eso, todas las agrupaciones de Bello se alindaron con uno de los dos cabecillas en confrontación en ese entonces, uno de los cuales, antes de ser extraditado, había pactado con las AGC el fortalecimiento de los grupos armados que trabajaban para él. Por esta razón, no hubo un alto número de víctimas en ese conflicto en Bello y por lo mismo todas las estructuras en esta jurisdicción, de forma directa o

<sup>11</sup> Misión de Observación Electoral -MOE- y Corporación Tankash. *Monografía político/electoral del municipio de Bello*. Bello, julio de 2011. pdf.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

indirecta, quedaron a partir del año 2012 al servicio de las AGC, que a su vez servía al Cartel de Sinaloa, quien era el único comprador de la droga que se producía para exportación en Antioquia, a partir de este año.


Para el año 2011, se había definido prácticamente la totalidad del mapa del control territorial de las organizaciones armadas ilegales de Bello, y de las procedentes de Medellín que tienen presencia en este municipio. El informe ya citado de la MOE presentaba el siguiente mapa de distribución territorial de los armados de Bello para 2011:



Fuente: MOE, 2011.

La incursión de las AGC al Valle de Aburrá, a partir de 2011, vino a fortalecer definitivamente la alianza y la hegemonía de las organizaciones ilegales presentes en Bello. Esto se debió a que la estructuración de sus negocios garantizaba el incremento constante de rentas ilegales.

Son varios los elementos que permitieron el crecimiento de las estructuras armadas ilegales de Bello, tanto en su expansión territorial como en el incremento de sus rentas, y que a su vez permitieron que se mantuviera un clima de relativa “tranquilidad” entre estas, pero que no estuvo exenta de configurar diversas vulneraciones a los derechos de

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

la población civil, aun cuando estas no se expresaran en acciones abiertas de violencia como un elevado número homicidios, masacres, desapariciones forzadas u otras conductas. Estos aspectos, de hecho, permitieron la consolidación de un Bloque sólido de las estructuras presentes en Bello desde varios ámbitos:

En un primer momento, las Águilas Negras o Urabeños, como eran conocidas las AGC entonces, pretendieron controlar la Oficina de Envigado, ya que con ello podrían monopolizar, además de la producción del clorhidrato de cocaína para la exportación, los eslabones del transporte de la droga hacia Centroamérica, negocio acaparado por las estructuras de la “Oficina de Envigado”. Con ese propósito, dicho grupo apoyó, a partir de 2010, a uno de los mandos que disputaban el control de esta organización. Pero rápidamente las AGC cambiaron su estrategia y, en vez de controlar “La Oficina”, comenzaron a fragmentarla, haciendo negocios directamente con las organizaciones que ya podían decidir de forma autónoma. Allí las estructuras de Bello tuvieron un trato preferente en el negocio con las AGC, factor que les permitió a todas las estructuras de la “Oficina de Envigado” presentes en Bello, construir un bloque común al interior de “La Oficina”, que obedecía a los intereses de las AGC y que estuvo liderado principalmente por el jefe máximo de Los Chatas, hasta el momento de su captura.


Este bloque tuvo el control territorial en casi la totalidad del Norte del Valle de Aburrá, incidencia en estructuras criminales en el resto del Área Metropolitana, un control importante de rutas internacionales del narcotráfico y una importante vocería de las AGC dentro de la “Oficina de Envigado”. Por eso, entre los años 2012 y 2017, se convirtió en el sector de mayor influencia al interior de lo que después se autodenominaría “Cuerpo Colegiado de la Oficina”<sup>12</sup>.

Otro elemento importante a tener en cuenta es que la relación con las AGC también le permitió a este bloque de organizaciones armadas ilegales presentes en Bello, la expansión hacia otras zonas de la región y el país. En la región, en los últimos años, las organizaciones de Bello se han expandido principalmente a las subregiones Suroeste, Oriente, Norte y Nordeste, en donde hay presencia de cultivos ilícitos, minería de oro, o sitios turísticos para ampliar el microtráfico, así:

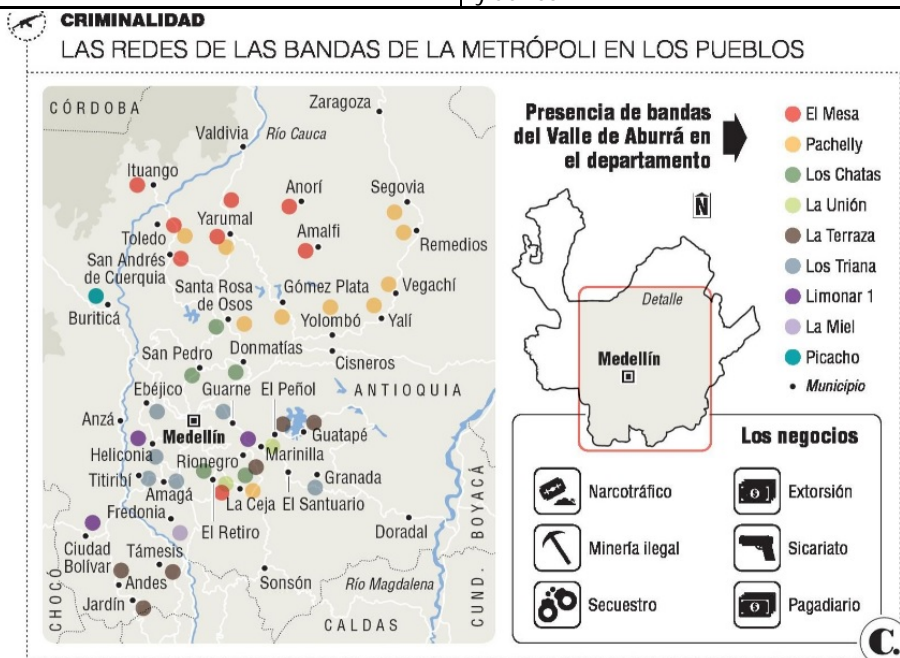
Estructura armada ilegal	Municipios de Antioquia donde han tenido presencia
Pachelly	San Andrés de Cuerquia, Toledo, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Yolombó, Yalí, Segovia, Remedios, Barbosa, Girardota y La Ceja
El Mesa	Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia, Anorí, Amalfi y El Retiro
Los Chatas	Santa Rosa de Osos, Don Matías, San Pedro de Los Milagros, Rionegro, La Ceja, Barbosa, Copacabana y Girardota
Los Triana (provenientes de la Comuna Dos de Medellín)	Guarne, Ebéjico, Heliconia, Titiribí, Amagá, Granada

<sup>12</sup> <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cuerpo-colegiado-de-la-oficina-el-nuevo-objetivo-de-las-autoridades-de-medellin-191122>. Consultado el 28 de abril de 2019.



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Oficina del Doce (también proveniente de Medellín)	Buritica, San Pablo y algunos municipios cafeteros del Suroeste antioqueño <sup>13</sup> .
San Pablo (Procedentes de la Comuna 1 de Medellín)	Ciudad Bolívar, Támesis, Jardín, Hispania, Fredonia y Jericó.




Fuente: El Colombiano 2019.

Pero la expansión de las estructuras armadas ilegales de Bello no se limita a la región antioqueña. Un ejemplo claro es la presencia de estructuras armadas de Bello en barrios de municipios de Soacha y de las vecinas localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme al sur de Bogotá DC, como desde 2017 ha observado la Defensoría del Pueblo por medio de la Nota de Seguimiento No. 008-17 (Soacha) y las Alertas Tempranas No 030-19, 062-18 (Soacha) y 086-19 (Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe) y 023-19 (Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa). Allí, la presencia de estas estructuras es reconocida como “Los Paisas”, quienes se presumen parecen proceder de Bello y estarían vinculados a la estructura conocida como El Mesa y otros a un sector de Pachelly. Capturas de integrantes de estructuras en Bello en otras regiones del país como la Costa Atlántica, el Eje Cafetero o el Cauca, dan cuenta de la presencia de estas organizaciones en diversas zonas del territorio nacional.

El tercer elemento que permitió la estabilidad en los pactos de distribución del control territorial local y la consolidación de las estructuras de Bello como bloque hegemónico, tiene relación directa con las rentas que han captado a partir de la urbanización ilegal y otro tipo de exacciones sobre la plusvalía de los usos del suelo. Si bien desde el año 2005 se comenzó a consolidar un escenario de pactación en la repartición del control territorial de las estructuras armadas ilegales en Bello, la aprobación del Plan de Ordenamiento

<sup>13</sup> <https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/crimen/valle-de-aburra>. Consultado el 28 de abril de 2019.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Territorial en 2009, fue el punto de inflexión que posibilitó la aceleración y consolidación de esos acuerdos, ya que indirectamente le permitió a esas organizaciones perfilar la captación de exacciones por la especulación urbanística, ya fuera con la venta de lotes en sitios prohibidos para la construcción por el Acuerdo, o con la extorsión a empresas constructoras, en sitios más centrales de la ciudad.


Como se mencionó anteriormente, este es uno de los elementos que permitió que durante los últimos quince (15) años, el mapa de la presencia y control territorial de las estructuras armadas ilegales en Bello haya sufrido mínimos cambios. A continuación, se describe ese mapa que tuvo vigencia entre 2012 y 2018:

**-Pachelly:** proviene de barrio del mismo nombre, el cual se encuentra ubicado en la Comuna 6 - Bellavista, prácticamente todos los barrios de esta comuna están bajo su control ilegal, incluyendo Playa Rica y Bellavista, estructura que fue subsumida por Pachelly. Pero el control territorial de Pachelly se extiende por todo el área noroccidental del municipio. Hasta finales del año 2018 también tenía pleno control en la Comuna 7 - Altos de Niquía, hegemonía que aseguraba también a través de dos estructuras aliadas: Los del Mirador y Los de Niquía - Camacol, que ejercía el control territorial en estos barrios del mismo nombre, pero a nombre de Pachelly. A partir de alianzas con Los del Mesa y Niquía - Camacol, también Pachelly logró la regulación completa del territorio de la Comuna 8-Niquía y su importante zona comercial, hasta gran parte de la Comuna 11 - Guasimalito. En el área rural, Los de Pachelly controlan las veredas que conducen del casco urbano hasta el corregimiento de San Félix, como Tierradentro y varias ubicadas sobre el llano de Ovejas, veredas del propio corregimiento de San Félix.

**-Los Chatas:** esta estructura, que opera desde la segunda mitad de 1980, comenzó su proceso expansivo desde la centralidad de Bello, teniendo como epicentro el barrio Espíritu Santo. Por esta razón, Los Chatas lograron el pleno control de las comunas centrales: Comuna 2 - La Madera, Comuna 3 - Santa Ana y gran parte de la Comuna 4 - Suárez; esta última en los barrios de: El Cairo, El Congolo, El Pérez, La Meseta y La Central. También controlan parte del parque principal de Bello; y casi toda la Comuna 5 - La Cumbre, salvo el barrio Buenos Aires. Así mismo, en la Comuna 11, tiene presencia en el sector de Navarra. En alianza con otros grupos locales, que llevan el nombre de sus barrios de procedencia: La Camila, Las Vegas y Fontidueño, también controla casi la totalidad de la Comuna 9 - Fontidueño. En el área rural, Los Chatas tienen presencia en las veredas adyacentes a la ruta San Cristóbal - San Félix como Primavera, Hato Viejo y Potrerito.

**-El Mesa:** esta estructura toma su nombre debido a su procedencia del céntrico barrio López de Mesa. El Mesa ha sido un grupo que paso de manejar negocios ilegales en el barrio y en zonas cercanas, en la última década a manejar negocios de mayor ámbito territorial, por eso su control territorial en Bello es mucho menor que el de sus antecesores. Tienen presencia en el barrio López de Mesa, La Central, La Plaza de Mercado, en la Comuna 4 y el barrio Buenos Aires en la Comuna 5.

**-Los Triana:** es una estructura que, desde 1980, tiene una base familiar procedente de la Comuna 2 - Santa Cruz de Medellín. De las grandes estructuras presentes en Bello, esta

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

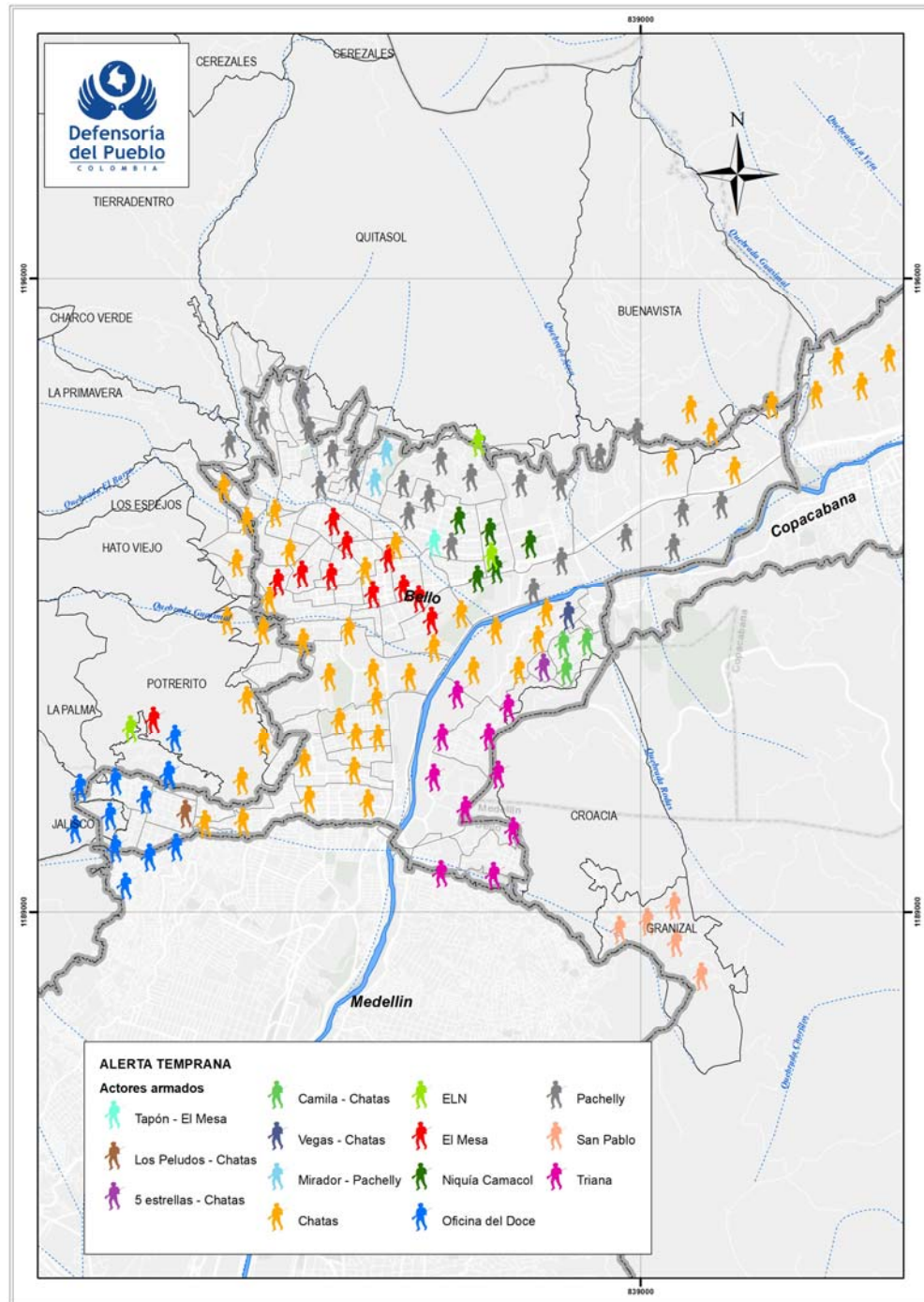
es la única que desde hace varios años está por fuera de “La Oficina”. Los Triana controlan prácticamente todos los barrios de la Comuna 10 - Zamora.

-*Oficina del Doce de Octubre*: procede de la Comuna 6 - Doce de Octubre de Medellín. Después de muchos conflictos por el control de la Comuna 1 - París de Bello, esta organización logró que le respetaran el control de este territorio y el del asentamiento Nuevo Jerusalén - El Cortado, un lote de 62 has. Ubicado en la vereda Potrerito, asentamiento de más de 18000 habitantes, principalmente población desplazada.

-*San Pablo*: esta estructura proviene de la Comuna 1 - Popular de Medellín, primero fue milicia, luego contra-milicia, posteriormente “Oficina de Cobro” y según la denominación criminal local, actualmente es una organización delictuosa integrada al narcotráfico, según definición de la Policía. A través del grupo El Pinal, San Pablo controla los 7 sectores del asentamiento de Granizal, de 24.000 habitantes.


La presencia de actual de dichas estructuras en Bello, y otras de carácter local, ha subsistido y se han fortalecido, gracias al apoyo o alianza con estas organizaciones más amplias, usualmente reciben el nombre del barrio de donde provienen como: El Tapón, Niquía Camacol, El Mirador, tradicionalmente aliadas a Pachelly; La Camila, Las Vegas, Fuentidueño y Los Peludos, estos últimos del barrio La Maruchenga y que trabajan con Los Chatas.

## ALERTA TEMPRANA



Como se puede observar, el mapa de control territorial de las estructuras armadas ilegales presentes en Bello coincide plenamente con el que presentaba la MOE hace ocho años. Pero para el año 2019, algunas fronteras vienen siendo irrespetadas y se vienen



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


sobreponiendo algunas zonas de disputa, algo que no sucedía desde hace al menos 15 años. Esto no solo ha ocasionado una transformación drástica de los repertorios de violencia de las estructuras armadas ilegales; también ha supuesto graves vulneraciones a los derechos de la población civil, las cuales pueden profundizarse y expandirse hacia diversas comunas y sectores del municipio.

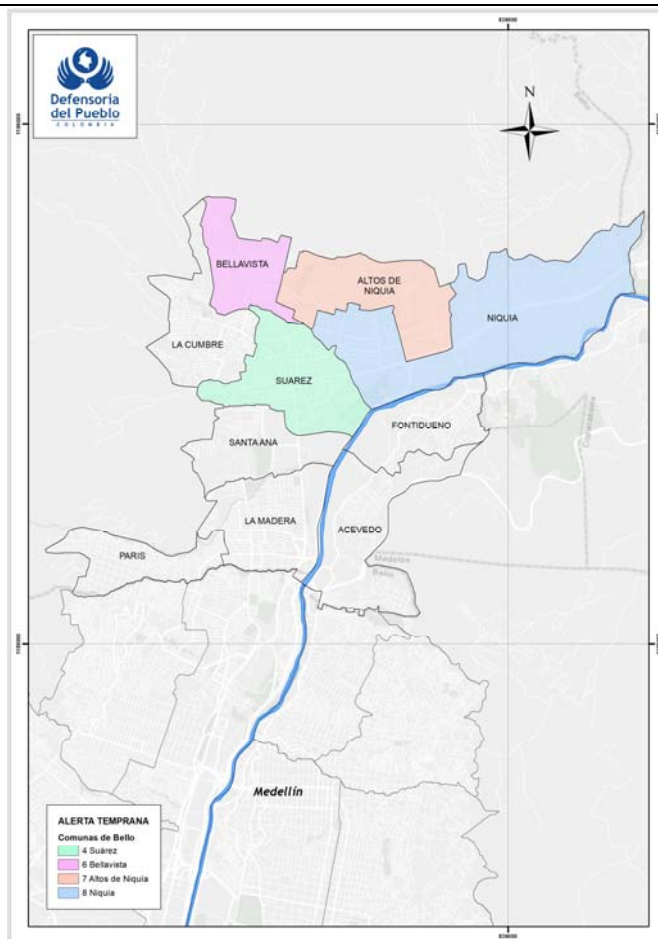
#### b. Contexto actual de amenaza

El contexto actual de amenaza en el municipio de Bello se puede describir desde dos ámbitos: el primero se trata de un escenario abierto de confrontación entre estructuras armadas ilegales, situado en las **comunas 6, 7, 8 y algunos barrios de la Comuna 4** de Bello. El segundo consiste en un escenario de control hegemónico, con repertorios de violencia y de vulneraciones a los derechos humanos diferentes al primero, y se da en sectores en donde las carencias y la falta de prestación de servicios sociales básicos por parte del Estado, quedan a la merced de la explotación de organizaciones armadas ilegales que prestan y cobran de forma ilegal esos servicios a una población en mayor situación de vulneración y conformada primordialmente por víctimas del conflicto armado: se trata en concreto de los asentamientos ubicados en *Granizal y Nuevo Jerusalén*.

En ambos escenarios, el contexto de amenaza se expresa en la confluencia de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado con amplia capacidad económica, organizativa y coercitiva, con intereses de consolidación de corredores para el funcionamiento de diversas economías ilegales y que, en algunos casos, se lucran e inciden directamente sobre dinámicas de informalidad en los usos del suelo urbano. Las disputas y alianzas sostenidas entre dichos actores se expresan escenarios diferenciados de riesgo de vulneraciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al DIH de la siguiente manera:

##### *i. Primer escenario de Riesgo: Comunas 4, 6, 7 y 8*


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<h2 style="text-align: center;">ALERTA TEMPRANA</h2>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018



El primer escenario de riesgo se encuentra comprendido por barrios de estratificación media y media-baja de las Comunas 4, 6, 7 y 8 del municipio, territorios actualmente objeto de disputa por diversos actores armados ilegales. En este contexto de confrontación converge también el establecimiento de alianzas entre grupos armados ilegales, estructuras de crimen organizado de alcance local, regional y nacional y organizaciones de crimen transnacional, cuyo accionar refleja la conformación de redes de ilegalidad que les otorgan a sus protagonistas una alta reputación de violencia y capacidad de daño sobre la población civil.

Se trata de un área de reciente densidad urbana, considerada como eje central de la zona norte del Valle de Aburrá, por lo cual es el asentamiento de un gran número de urbanizaciones, comercio, rutas de movilidad, allí está la primera estación del Metro y es el punto de acceso a las troncales que van hacia el norte del país. En consecuencia, es un territorio estratégico para la derivación de rentas ilícitas y para la movilidad de la ilegalidad.

En este territorio se evidencia la presencia de estructuras del grupo armado posdesmovilización de las AUC conocido como La Oficina. Allí se había consolidado un

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

dominio de Pachelly durante los últimos 15 años, pero ante el crecimiento y expansión de esa organización a otros negocios trasnacionales y hacia otros territorios nacionales, los jefes tradicionales se vieron obligados a entregar mayores responsabilidades y control sobre las rentas locales a lugartenientes y otras estructuras aliadas como Niquía Camacol y El Mesa. De esta forma, algunos mandos medios, que a su vez coordinaban las relaciones con los grupos anteriormente citados, alcanzaron tal nivel de control sobre el territorio que retaron a sus antiguos jefes, desatando una confrontación bastante violenta, con profundos impactos sobre la vida, libertad e integridad de los habitantes de los barrios de estas comunas.

El punto de inflexión en esta dinámica fue un homicidio múltiple perpetrado a las 9:00 pm del 11 de febrero del presente año, en el barrio Niquía. Desde dos motos y una camioneta, descendieron los sicarios que acabaron con la vida de tres personas<sup>14</sup>. Según la información entregada en su momento por la fuerza pública, se trataba de un supuesto lugarteniente de la banda Pachelly, asesinado junto con dos de sus cercanos colaboradores. Esta acción violenta desató una serie de homicidios que progresivamente instauraron un ambiente de zozobra generalizado entre la población de varios barrios de las comunas advertidas, con presencia de Pachelly, Niquía - Camacol y El Mesa.


A partir de entonces, comenzó a configurarse una cruenta y extendida contienda, en paralelo al fortalecimiento de células criminales que ya no estaban dispuestas a dejarse manipular de sus antiguos jefes. Al interior de Pachelly se escindió un sector minoritario que logró obtener el apoyo de otras estructuras que tienen un carácter actualmente autónomo, como lo son El Mesa y Niquía - Camacol. Por esa razón, se ha desatado una disputa que, desde entonces, ha provocado la mayoría de los homicidios cometidos durante el presente año en este municipio que, visto así, expresan un grave riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos, y han conllevado actos que generan terror en la población.

Dicho escenario ha generado un impacto directo sobre los/as habitantes de estas comunas y que varias personas de la población civil han perdido la vida por balas disparadas por integrantes de estas bandas. Familiares de supuestos integrantes de estructuras ilegales, personas que cruzan “barreras invisibles”, quienes son confundidos o asesinados por sospecha, entre otros, hacen parte del amplio perfil de víctimas en medio de este contexto de disputa, quienes nada tienen que ver con el conflicto violento.

La mayoría de los homicidios ocurren en las zonas de confrontación que comprenden varios barrios de las Comunas 6, 7, 8 y algunos sectores de la Comuna 4, en particular los que limitan con las anteriores. Los barrios de Niquía - Camacol, Niquía Bifamiliares, Ciudadela Niquía, Altos de Niquía, El Mirador, Pachelly, El Congolo, Buenos Aires, Las Araucarias, El Carretero, Manchester, sector de El Tapón, López de Mesa, son los barrios que registran la mayor ocurrencia de hechos victimizantes y en donde están ubicados los grupos armados ilegales.

<sup>14</sup>

<https://www.minuto30.com/identifican-a-los-hombres-del-triple-homicidio-en-bello-al-parecer-pertenecerian-a-los-pachelly/779095/>

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Sin embargo, además de los homicidios, otras graves conductas vulneratorias a los DDHH tienen lugar en contra de la población, mediante la proliferación de amenazas verbales, mediante redes sociales o panfletos con un fuerte lenguaje de intimidación a las víctimas, incluso señalando residencia y movimientos de familiares; enfrentamientos armados con interposición de población civil; restricciones a la movilidad; atentados y reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes. También prolifera el cobro generalizado de extorsiones.

El conflicto al interior de Pachelly, con la señalada participación de los grupos de El Mesa y Niquía Camacol, se ha caracterizado entonces por ser altamente violento durante lo corrido del año 2019. Varios de los homicidios perpetrados han sido cometidos con un alto nivel de sevicia; en algunos casos se evidencian torturas y tratos crueles, en otros ha habido desmembramientos, decapitaciones y los cuerpos son dejados en vía pública, envueltos en plásticos.

Los riesgos de enfrentamientos con interposición de la población civil se evidencian de diversas maneras: se han producido en varios eventos con armas largas, durante el día y frente a la concurrencia de todo tipo de públicos. Tal confrontación también ha permitido revelar un nuevo escenario de pactos entre estructuras armadas ilegales, que podría estar generando una ruptura del bloque unido que han construido estas estructuras presentes en el norte del Valle de Aburrá, incluso al interior del denominado “Cuerpo Colegiado de la Oficina”.


Cartas públicas y panfletos que han circulado y que aparentemente son suscritos por líderes de los grupos en contienda, parecen sugerir que el pacto y las alianzas, además de estar quebrantándose en lo local, podrían también ser inestables a nivel regional y trasnacional, configurando un escenario de riesgo más complejo a escala territorial, del que actualmente se observa.

La hegemonía de la alianza de siete (7) años entre el Cartel de Sinaloa y las AGC sobre las estructuras ilegales presentes en Bello al parecer se estaría resquebrajando. El sector minoritario disidente de Pachelly, El Mesa y Niquía Camacol, al parecer sostendría una alianza con el ELN y el autodenominado Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como “Caparrapos”. Tal como se ha documentado en las Alertas Temprana emitidas por el SAT para el Norte y Bajo Cauca antioqueños<sup>15</sup>, en esas subregiones la población civil ha soportado graves vulneraciones a sus DDHH e infracciones al DIH por la confrontación entre las AGC y la alianza que los llamados Caparrapos sostienen con el ELN y disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC-EP. Aparentemente, las AGC mantienen el apoyo del Cartel de Sinaloa, pero sus adversarios estarían recibiendo el apoyo económico y el suministro de armas procedentes del norte del continente gracias a otro cartel mexicano, que podría ser Jalisco Nueva Generación.

El interés de los carteles mexicanos de patrocinar dicha confrontación armada estaría dirigido a controlar toda la cadena ilegal del narcotráfico. En las subregiones del Norte,

<sup>15</sup> Defensoría del Pueblo. Alertas Tempranas No. 009 - 18 para Cáceres, No. 027 - 18 para Tarazá, No. 029 para Ituango, No. 031 - 18 para Caucasia, No. 002 para Valdivia, No. 003 para Caucasia, El Bagre y Zaragoza.

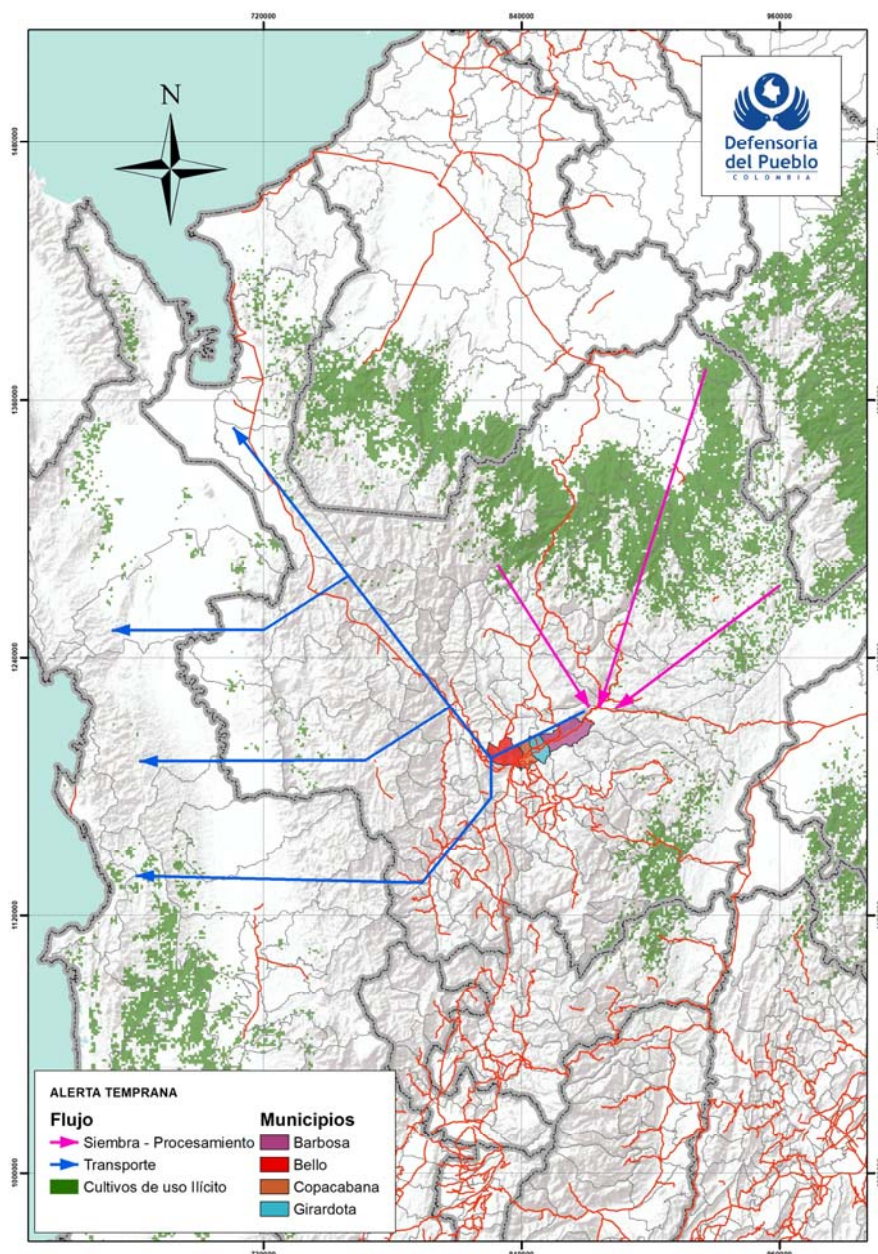


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


Nordeste y Bajo Cauca, la disputa busca el control de los territorios donde existen cultivos de uso ilícito de hoja de coca, laboratorios de cristalización y que coinciden con zonas aptas para la explotación aurífera. En subregiones como el Valle de Aburrá, el Occidente y el Nordeste, el interés de la disputa armada estaría representado por las rutas de movilidad, para sacar los cargamentos de cocaína hacia la Costa Pacífica y es ahí donde el Occidente del Valle de Aburrá cobra una importante relevancia para las organizaciones articuladas al negocio del narcotráfico:

La coca que se cultiva en las estribaciones de la Cordillera Central y en la Serranía de San Lucas es procesada en laboratorios ubicados en la subregión Norte. Esa mercancía ilegal entraría por el municipio de Barbosa, en donde incluso se han localizado grandes laboratorios en la zona rural, debido a que este es el municipio de entrada al Valle de Aburrá por el norte, en donde confluyen tres importantes troncales del Magdalena Medio, Nordeste y Norte. De ahí, la coca procesada pasa a Girardota municipio que, al igual que Barbosa, es controlado por Los Chatas y Pachelly; luego es transportada al municipio de Bello, municipio estratégico para continuar con la movilidad hacia el Noroccidente, en la vía San Félix - Pajarito, o hacia el Suroccidente del Valle de Aburrá, conectando con la Comuna 7 - Robledo y el Corregimiento de San Cristóbal, jurisdicciones ubicadas en Medellín, desde se proyecta su salida del país hacia el golfo de Urabá y al Pacífico, a través de las subregiones de Occidente y Suroeste, como se puede observar en el siguiente mapa:

## ALERTA TEMPRANA



Precisamente las alertas tempranas 059 - 18, para la Comuna 13 - San Javier y Comuna 12 - La América, la 041 - 18, para los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado y Comuna 16 - Belén, de Medellín, describen cómo una de las causas de la conflictividad armada, entre estas estructura locales, es la disputa por el control de este importante corredor de movilidad, que además pasa por los municipios cercanos del Occidente y el Suroeste en la búsqueda de salidas hacia el Océano Pacífico. No en vano, la Alerta Temprana No. 027-19 para los municipios de Frontino y Urrao advierte cómo, de cierta manera, la factible confrontación por el control de ese último municipio estaría vinculada

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

con la tendencia de la disputa desde el Valle de Aburrá con el fin de habilitar rutas internacionales por el Pacífico colombiano, estableciendo un escenario más amplio y complejo de vulneraciones a los derechos de la población civil, tanto a nivel urbano como rural.

En lo que corresponde al tráfico de armas, este mismo corredor operaría a la inversa, siendo Bello un importante centro de recepción y distribución hacia otras zonas del departamento de Antioquia.

A lo anterior se suma que, con la presencia de estructuras de Bello en otros municipios de la región y el país, el conflicto violento podría extenderse a otras zonas y exacerbarse. De hecho, se presume que la injerencia directa de estas estructuras sobre el centro del país ha significado también la llegada de personal armado proveniente de esos sectores a Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá: Organizaciones con presencia en Soacha y el sur de Bogotá como los autodenominados ‘Paisas’ estarían trayendo sicarios y otro tipo de personal armado desde el centro del país hacia Bello, ante la desconfianza que tienen de ser traicionados por sus propios hombres en el territorio local.


Por eso, la hipótesis de riesgo de la presente Alerta considera que, de escalonarse este conflicto en Bello, puede extenderse a una cadena más amplia de territorios, aspecto que se traduciría en la configuración de un escenario amplio y generalizado de violencia armada y de vulneraciones masivas a los derechos humanos y que incrementaría la crisis humanitaria existente.

Ahora bien, al escenario de riesgo se suma también el fortalecimiento de la presencia del **ELN** en el escenario urbano del Valle de Aburrá. En este contexto se observa que, al parecer, en Bello hay un punto importante para afianzar la avanzada armada hacia otras zonas del Área Metropolitana. Como se decía anteriormente, desde hace varias décadas ha existido una célula del ELN en Altos de Niquía que presta servicios logísticos y otro tipo de servicios a los frentes de guerra del ELN en zona rural. Si bien no ejerce control militar territorial, en cada conmemoración de esta guerrilla, esta célula realiza algún tipo de acción acciones simbólicas como la instalación de banderas<sup>16</sup>.

En todo caso, la alianza que el ELN recientemente ha establecido con otras estructuras ilegales en el norte del departamento también parece tener un propósito en la búsqueda de ampliar su incursión militar en Bello, apoyados en estructuras locales, al parecer un sector de Pachelly, Niquía Camacol y El Mesa.

La Defensoría del Pueblo, durante el presente año, ha recibido al menos dos declaraciones de desplazamiento forzado, en donde se aducen intentos de reclutamiento forzado de adolescentes por parte de supuestos integrantes del ELN en barrios de las comunas 6 y 7 de Bello. Conforme versiones comunitarias, existen patrullajes conjuntos del ELN con estructuras ilegales locales de Bello, en la parte alta del asentamiento Nuevo Jerusalén, por el sector del Reversadero, cercano al corregimiento de San Félix, y que ha sido tradicionalmente objeto de control territorial de Pachelly. Esta estructura, desde hace 15

<sup>16</sup> <https://noticias.caracoltv.com/medellin/con-expertos-antiexplosivos-retiran-banderas-del-el-n-instaladas-en-bello-1e137>

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

años, ha ejercido dominio criminal de esta carretera hasta San Pedro de Los Milagros, en donde existe también presencia de las AGC.

Así mismo, se ha conocido la realización de capturas de presuntos integrantes del ELN en Bello e incautaciones de importantes cantidades de armamento conforme ha referido la Fiscalía<sup>17</sup>. La fuerza pública ha señalado como destinatario de las armas al ELN, situación que da cuenta de que esta guerrilla ya se encuentra en Bello y que puede ayudar a desequilibrar la balanza en el conflicto actual en este municipio del Norte. En todo caso, no se puede descartar que sus intereses sobre este territorio sean más ambiciosos, en términos del usufructo del negocio de los corredores de movilidad del narcotráfico, y un claro plan de reinstalación de poder militar en zona urbana y rural del Valle de Aburrá.

Las posibles vulneraciones a los derechos de la población, por cuenta de su accionar en el territorio, también podrían abarcar: homicidios selectivos y múltiples, afectaciones a la integridad física y a bienes civiles como consecuencia de acciones bélicas (por ejemplo, por el eventual uso de artefactos explosivos, reclutamientos forzados y uso ilícito de NNA, imposición de restricciones a la movilidad y de normas sobre los/as habitantes de los barrios, etc.

#### *ii. Segundo Escenario de Riesgo: Vereda Granizal y asentamiento Nuevo Jerusalén*


Este segundo escenario se focaliza en la Vereda Granizal y el sector Nuevo Jerusalén, amplias zonas rurales y periféricas de la centralidad del municipio de Bello con profundos vacíos de la oferta estatal en su territorio. A diferencia del escenario anteriormente descrito, se trata de zonas objeto de control hegemónico por estructuras armadas ilegales, las cuales han logrado establecer fuertes mecanismos de control territorial y social que también suponen afectaciones a los derechos de la población.

En caso de que el contexto de amenaza referido anteriormente se exacerbe, es factible que las disputas se hagan extensivas a estos territorios, situación que incrementaría los impactos humanitarios sobre la población que los habita, compuesta mayoritariamente por víctimas del conflicto armado y otros grupos poblacionales en alta situación de vulnerabilidad.

En todo caso, es importante anotar que el hecho de que se trate de contextos de control cuasi hegemónico y no existan dinámicas intensivas de homicidios allí, no significa la ausencia de riesgos; antes bien, la evidencia de este escenario también demanda medidas de prevención de las instituciones.

<sup>17</sup> <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/incautado-arsenal-de-guerra-destinado-a-la-conformacion-de-una-celula-urbana-del-eln-en-medellin/>



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

### Vereda Granizal:




La vereda Granizal se ubica al Suroriente del municipio de Bello. Limita con la Comuna 1 - Popular, del municipio de Medellín y con la zona rural del municipio de Copacabana. El ingreso a la vereda es posible a través de la denominada antigua carretera de Medellín - Guarne<sup>18</sup>-. Actualmente, esta vía se encuentra destapada y en pésimo estado, pues solo dos kilómetros están pavimentados a la altura del sector de El Pinar, perteneciente a Medellín.

Si bien Granizal está localizada muy cerca de la Comuna 1 de Medellín, se ubica en la periferia de Bello. No hay ninguna vía vehicular que comunique directamente al casco urbano de Bello con esta vereda, razón por la cual es preciso atravesar el noroccidente, centro y todo el nororiente de Medellín para poder acceder a ella desde el centro del municipio.

Tal vez por esta razón, la dinámica del asentamiento de la vereda Granizal de Bello ha estado influenciada principalmente por las lógicas de poblamiento establecidas desde la Comuna 1 - Popular de Medellín. Esto se debe principalmente a dos factores: la comuna 1 de Medellín es el sector de más escasos recursos y necesidades básicas de esta ciudad: barrios como María Cano, Carpinelo y la Avanzada fueron las principales zonas de invasión durante las décadas de 1970 a 1980 en Medellín, razón por la que, a mediados de 1990,

<sup>18</sup> Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, esta ruta era muy importante porque permitía la conectividad de la capital con el Oriente antioqueño y a su vez con el centro del país.



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

estás cotas altas, localizadas por fuera del perímetro urbano, ya se encontraban densamente pobladas.

Adicionalmente, la agudización del conflicto armado en Colombia durante la segunda mitad de los noventa también ha favorecido que esta zona se vea influenciada por los procesos de poblamiento de la Comuna 1 de Medellín. Entre los años 1996 y 1998, en Granizal se dio un auge de recepción de población desplazada forzada por la violencia de todo el país y particularmente de las subregiones del Urabá, Occidente y Oriente antioqueño, cambiando con ello el modelo de ocupación rural dispersa a un asentamiento informal, altamente densificado y sin acceso a servicios básicos

A su vez, estos dos elementos son la causa de un tercer factor: la dinámica del control territorial ejercida por grupos armados ilegales en Granizal históricamente ha sido prestablecida desde la ciudad de Medellín y concretamente por las estructuras presentes en la zona Nororiental que, incluso desde la venta ilegal de lotes, son las que han promovido el crecimiento dramático de este asentamiento humano.


El conglomerado habitacional comprende una extensión de 23.40 hectáreas (has). Esta vereda se encuentra actualmente ocupada por un conjunto de asentamientos humanos compuestos por los sectores de El Pinar, Oasis de Paz, Regalo de Dios, Altos de Oriente 1 y 2, El Siete y el más reciente llamado Manantiales, los cuales constituyen en su conjunto un gran asentamiento irregular de hecho. Se estima que entre los siete (7) sectores pueden habitar al menos 22000 personas, conforme cálculos de la Alcaldía municipal<sup>19</sup>.

El área urbanizada también inició un poblamiento semi rural disperso, pero la venta acelerada de lotes por parte de estructuras armadas ilegales, además de generar despojo a familias trabajadoras de la tierra, les generó una renta enorme, ya que la mayoría de los lotes vendidos a partir del año 2000 fueron directamente a las arcas de estas organizaciones, de agentes de invasión ilegal en zonas prohibidas, y rápidamente también comenzaron a sacar renta de otros servicios básicos no prestados por el Estado, con el argumento de que se trataba de un asentamiento de hecho ilegal.

Granizal, según el POT de Bello, Acuerdo No. 033 de 2009, está ubicado mayoritariamente sobre un área de expansión urbana y sobre terreno geológicamente inestable, pero mitigable. Parte del terreno es de un particular y otra parte es del Municipio de Bello; precisamente, esta última es la parte que más se ha urbanizado a partir del POT de 2009. No obstante, por no encontrarse dentro del perímetro urbano, ni dentro de las cotas máximas de prestación de servicios públicos, ni Bello, ni el operador de servicios, que es Empresas Públicas de Medellín (EPM), han realizado las gestiones para llevar el acueducto y el alcantarillado formal a esta comunidad.

Pero no solo eso, otros servicios necesarios para el acceso a derechos fundamentales, como la pavimentación de vías, la ampliación de la cobertura educativa oficial, un mejoramiento en la prestación del servicio de energía eléctrica, el tener una junta administradora local, la seguridad pública, entre otros, no son prestados por el Estado,

<sup>19</sup> Alcaldía de Bello, Unión Europea. Plan de Integración Local Vereda Granizal. Bello, 2015. Documento pdf.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

algo que ha sido aprovechado por los grupos armados ilegales para prestarlos según sus condiciones violentas y los interés de sus rentas ilegales.

Pero a partir de la desmovilización de las AUC, la **Banda de San Pablo**, procedente del barrio del mismo nombre de la Comuna 1 de Medellín, comenzó a ejercer control territorial sobre la ilegalidad del asentamiento. A partir de 2005 ha mantenido su hegemonía en esta zona a través del grupo **El Pinar**, establecido en este sector de la vereda.


El control que San Pablo, por intermedio de la banda de El Pinar, ejerce sobre la población civil es muy fuerte, aun cuando sus repertorios de violencia son distintos a los referidos en el primer escenario -Comunas 4, 6, 7 y 8-, por tratarse de un contexto de dominio hegemónico y no de disputa. En este sector, la violencia se caracteriza por ser muy selectiva, casi que imperceptible pero muy eficaz para generar terror en la comunidad. Los homicidios selectivos, los desplazamientos individuales, y las amenazas dirigidas contra la población civil son los principales instrumentos para intimidar a los residentes y generar, por esta vía, dispositivos de control social funcionales a sus propósitos de control sobre la ilegalidad.

En contraste con el primer escenario de riesgo, en Granizal, los repertorios de violencia y vulneraciones a los derechos de la población civil son más sofisticados y no tan visibles, como quiera que le otorgan un papel relevante al cobro generalizado de extorsiones a la población civil, como mecanismo de verificación de lealtades y de “acatamiento” de su dominio ilícito y las constantes amenazas contra los habitantes de esta vereda. A pesar de que la población en un 80% está por debajo de la línea de la pobreza<sup>20</sup> y la inversión pública es mínima, San Pablo (El Pinar) genera rentas de cualquier servicio básico requerido por la comunidad, siendo el agua uno de los bienes vitales más esenciales del que generan rentas ilegales los integrantes de San Pablo.

La situación de DDHH en este sector se tornó compleja a mediados del mes de abril de 2018, cuando el líder del grupo El Pinar convocó a los/as líderes/as de las juntas de acción comunal y a fontaneros/as del servicio de agua indicándoles el monto que debían cobrar y el dinero que debían entregarle por el cobro a cada familia, según refieren diversas versiones comunitarias. Algunos líderes manifestaron su malestar por el alto costo y el riesgo de ser implicados por las autoridades en una actividad ilegal.

Al final, El Pinar terminó encargándose de recoger directamente el dinero de los siete (7) sectores, cobrando 4000 pesos por cada vivienda cada fin de semana. A razón de cerca de 4500 viviendas, se estima que solo por este concepto recoge cerca de 72 millones de pesos al mes. Esta situación generó una gran presión sobre los/as líderes/as de las juntas de acción comunal situación que, a la postre, repercutió en amenazas sobre algunas personas. Sobre el particular, conviene anotar que la Defensoría Regional Antioquia recibió dos (2) quejas de desplazamiento forzado por amenazas de grupos armados ilegales a líderes sociales en este contexto y activó la respectiva ruta de protección.

<sup>20</sup> Ibid.


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Se debe aclarar que el tipo de agua del que se surte de la comunidad no es potable, es tomado del Tanque Tolba de propiedad de EPM, sin ningún tipo de tratamiento, altamente contaminada y distribuida por una red caótica de tubería de PVC o mangueras, expuestas y mal conectadas y aun así pagan cerca de 20000 pesos mensuales por este servicio que realmente no lo prestan los actores armados, solo se usufructúan de él. Las personas que se atrasan en un mes son desconectadas y la multa por la reconexión ronda los 100.000 pesos. Las personas desconectadas son insultadas, maltratadas e intimidadas. A eso se suma que no existe alcantarillado y por ende las aguas negras corren expuestas hasta caños cercanos.

Pero las exacciones y las rentas que esta estructura deriva a expensas de la comunidad no se reducen al agua. Bienes básicos de la canasta familiar como los huevos, las arepas, las carnes frías, los minutos de celular, incluso el gas -cuyas pipetas son llenadas con menor cantidad- hacen parte del abanico de productos que son acaparados por la banda de San Pablo. Además, extorsionan todo tipo de actividad económica que se pueda desarrollar en la vereda, como el transporte público, el comercio, a los productores y transportadores de cebollas, incluso, si se enteran de que una persona tiene un contrato laboral, esta se ve forzada a declarar y entregar el 10 por ciento de su ingreso al actor armado, conforme han referido diversas fuentes comunitarias.

Así mismo, si bien se presume que el actor armado ilegal incidió en la venta irregular de lotes ubicados en este sector a muchos de los residentes que llegaron allí en condición de vulnerabilidad socioeconómica, se conoce también que dicha agrupación suele proferir constantes amenazas en su contra. Dichas amenazas estarían dirigidas a incentivar el desplazamiento de las familias objeto de su intimidación, facilitando con esto la posibilidad de apropiarse nuevamente de sus bienes y revenderlos, ya que no existe formalidad en la propiedad de los inmuebles. En otras palabras, el actor armado ilegal se lucra de la especulación e informalidad de los usos del suelo en estos sectores periféricos, dinámica que representa profundas vulneraciones a los derechos de la población, particularmente a la vida, a la integridad, a la seguridad y a su libertad de residencia. Tratándose de segmentos poblacionales mayoritariamente víctimas del conflicto armado, estas prácticas constituyen también serias falencias sobre las garantías de no repetición y vulneraciones a sus procesos de reubicación y/o reintegración local.

De este modo, el desplazamiento forzado resulta convirtiéndose en una vulneración invisibilizada en la vereda Granizal, pues muchas familias, de conformidad con los intereses del actor armado sobre el territorio y sus mecanismos de control territorial y social, son despojadas de los bienes que ocupan y sus casas o lotes son vendidos a otras personas. Pero no solo se trata de familias; según ha conocido el SAT de la Defensoría del Pueblo, fundaciones con gran reconocimiento en la comunidad por su trabajo social con grupos vulnerables, como es el caso de la Fundación Huellas dedicada al trabajo con niños, niñas y adolescentes, también habría sido afectada por estas acciones. A principios del año 2018, esta Fundación tuvo que parar su operación y desplazarse de la vereda Granizal por los hostigamientos y extorsiones en su contra, acciones que tenían lugar incluso en espacios abiertos comunitarios.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Otro caso que llama la atención es el de una familia venezolana obligada a desplazarse a principios de mayo de 2019. En horas de la madrugada un grupo de hombres armados incursionaron en la vivienda con armas de fuego, amenazaron a esta familia residente en el sector de El Pinar, exigiendo el dinero producto de la liquidación laboral del padre de familia. Esto los obligó a desplazarse forzosamente para salvaguardar su vida e integridad.

*Asentamiento Nuevo Jerusalén - El Cortado, vereda Potrerito:*




Este asentamiento se encuentra ubicado en un predio de 62 hectáreas, en la vereda de Potrerito, en una finca de nombre El Cortado. El terreno limita con la Comuna 1 - París de Bello y con las veredas del Llano de Ovejas, ubicadas en el corregimiento de San Félix.

En el año 1994 la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (Corvide), una empresa de Medellín compró este predio con el propósito de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, pero la empresa se disolvió y el proyecto no se ejecutó. Aunque el predio se ha visto envuelto en varios litigios judiciales, durante mucho tiempo ha tenido serios vacíos institucionales pues ni el municipio de Medellín, como propietario del lote, ni el de Bello, como autoridad jurisdiccional, hicieron lo suficiente para evitar su invasión.

Durante la primera década del siglo XXI el asentamiento era disperso, con una comunidad semi-rural dedicada primordialmente al cultivo de café, caña, frutales, frijol entre otros, conforme indicaba un censo realizado por la Alcaldía de Bello en 2009. No obstante, a



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

partir del año 2012, con la consolidación del control territorial por parte de la estructura armada ilegal procedente de Medellín conocida como 'Oficina del Doce de Octubre' -que para entonces ya era una organización tutora del combo Los de París- inició una serie de despojos de las cosechas y de venta intensiva de lotes que daría lugar a un proceso de reconfiguración territorial con serios impactos sobre la población civil.

El censo realizado por Corantioquia y la Alcaldía de Bello en 2014, en virtud de una orden emanada de la segunda instancia de una acción popular<sup>21</sup>, daba cuenta de cerca de 2.120 familias asentadas en este sector, que representaban unos 10.200 residentes. En todo caso, según versiones de habitantes de la comunidad y de funcionarios públicos de Bello, en los últimos 5 años ha continuado la venta irregular de lotes, por lo que se estima que esta cifra en la actualidad puede ser muy superior. Solo la comunidad estima en 18.000 personas los habitantes de asentamiento informal.

El SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió esta situación a través del Informe de Riesgo de Inminencia No. 029 de 2013, para el sector de Nuevo Jerusalén en Bello: Allí se describía la forma en que el actor ilegal conocido como 'Los de París' -relacionado entonces con la llamada 'Oficina de Envigado'- despojaba, mediante intimidación y violencia, las cosechas y otras mejoras de población víctima de desplazamiento forzado asentada allí. Además, se advertían hechos victimizantes como homicidios selectivos, desplazamientos individuales, amenazas al liderazgo social, extorsiones, reclutamiento, uso y/o utilización de NNA, restricciones a la movilidad, cobro del servicio informal de agua y energía, como principales conductas vulneratorias.

A pesar de las recomendaciones que invitaban a proteger al territorio y su población y a evitar la urbanización ilegal y los despojos de cosechas por parte del actor armado, las autoridades concernidas en aquella ocasión no fueron eficaces para evitar el desbordamiento de la ocupación de este suelo, que se caracteriza por contar con elevadas pendientes, alto riesgo ambiental e inestabilidad geológica.


En materia de seguridad y otras vulneraciones a la vida y la integridad personal, en los últimos tres años se han producido cambios significativos en este territorio. Durante el proceso más intenso de venta ilegal de lotes por parte del actor armado ilegal, esta estructura tuvo un comportamiento hostil con los habitantes, ya que su intención era asentar su control territorial. Para ello se valieron de graves vulneraciones a los DDHH, representadas en: homicidios selectivos; desplazamientos forzados individuales; constreñimiento o cooptación del liderazgo comunitario; tratos crueles a partir de golpizas como mecanismo para infundir terror y la imposición de exacciones como el cobro por el acceso a conexiones irregulares de energía<sup>22</sup>.

Pero según las fuentes comunitarias, en los últimos tres años, estas conductas se han reducido a su mínima expresión, quizás porque el actor ilegal ha logrado imponerse y hegemonizar su control allí, aspecto que diverge de la dinámica que tiene lugar en el

<sup>21</sup> Fallo del Juzgado 26 Administrativo de Medellín - Radicado 2010-00135. Segunda instancia Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

<sup>22</sup> En su momento, se cobraban 20.000 pesos mensuales por la luz y 4.000 pesos por la conexión a las tuberías y mangueras de agua no potabilizada.



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

primer contexto de riesgo descrito al inicio de este apartado. Aunque se mantiene el control territorial ilegal de la Oficina del Doce, los mandos asignados recientemente para esta zona han optado por instaurar un modelo de control social que busca “ganarse” la confianza de la comunidad antes que derivar rentas de ella, con el propósito de establecer una suerte de “legitimación” de su accionar y desincentivar toda posible denuncia de su presencia ante las autoridades.


En virtud de lo anterior, versiones locales manifiestan que, presumiblemente, el actor armado ha disminuido los cobros extorsivos y otras exacciones impuestas a la comunidad. Este actor armado se lucró durante una década de la venta ilegal de aproximadamente 2.000 lotes, cuyos precios, en un principio, oscilaban entre los dos y cinco millones de pesos, pero según su ubicación y extensión sus réditos económicos podrían ser mayores.

En los últimos años, estos precios se incrementaron ante el alto porcentaje de urbanizaciones y la expectativa del cumplimiento de las sentencias judiciales, razón por la que los actores armados no solo habrían disminuido su repertorio de violencia asociado al cobro de exacciones, sino también habrían mermado presuntamente su participación en otras formas de violencia como la ejecución homicidios -el último evento se presentó hace 5 años-, la conminación al desplazamiento forzado o la persecución abierta a liderazgos sociales, que ahora estarían sometidos a un orden social de convivencia forzada con el actor armado.

En todo caso, aun cuando las expresiones de violencia abierta en contra de la población civil se hayan disminuido en esta zona, la Defensoría del Pueblo considera factible que, como parte de la dinámica de ese actor armado, este pueda estar ejecutando otros mecanismos subrepticios de control social capaces de ocasionar potenciales vulneraciones a los derechos de la población civil de Nuevo Jerusalén por medio de: la imposición de normas de conducta, incluyendo la perpetuación de estereotipos de género y códigos de comportamiento; acciones violentas selectivas contra poblaciones estigmatizadas socialmente (supuestos consumidores de droga, presuntos delincuentes comunes o personas que ejercen la prostitución), tachadas de generar supuestas afectaciones sobre la convivencia y seguridad ciudadana; la determinación de horarios de circulación, incluyendo, por supuesto, la aplicación eventual de sanciones a las personas que se aparten de sus normas que, como es lógico, implicarían serias afectaciones sobre la población. Lo anterior, tomando en cuenta la población civil, en contextos de conflicto, suele ser vista como fuente de respaldo político, económico, moral y logístico<sup>23</sup>, por lo cual no se desestima la ocurrencia de este tipo de conductas.

En paralelo a la dinámica referida, se puede identificar la posible penetración de otras organizaciones ilegales en la vereda Potrerito y los sectores más altos de Nuevo Jerusalén, como El Reversadero, Torre 11 y Las Cosechas, zonas en las cuales actualmente miembros de la Oficina del Doce ya no pueden ingresar. Esta situación ha supuesto un ambiente de incertidumbre ante la configuración de un posible escenario de disputa armada que incrementa las vulneraciones a los derechos de la población civil.

<sup>23</sup> Cfr. Centro Nacional de Memoria Histórica, *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*, Bogotá: Imprenta Nacional 2013, p. 37.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Durante lo corrido del año en curso, la incertidumbre y la zozobra se han incrementado debido a la circulación de hombres armados en estos territorios, que hacen temer un escenario de confrontación en el que la población civil podría quedar inmersa. Aunque aún no es del todo clara la identidad de esa agrupación, algunas personas manifiestan que podría tratarse del ELN, en posible alianza con un sector de la banda Pachelly.

Previamente, la Oficina del Doce de Octubre ejercía control sobre estas zonas y cobraba exacciones en Nuevo Jerusalén por intermedio de agrupaciones locales conformadas jóvenes residentes en ese territorio; sin embargo, quizás temiendo una incursión violenta, actualmente esa estructura estaría patrullando por medio de hombres que al parecer provienen directamente de la propia Comuna 6 - Doce de Octubre de Medellín.

Conviene señalar que, desde hace varios años, existe presencia de Pachelly en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix, de gran interés desde la perspectiva de la movilidad de la ilegalidad entre el noroccidente y el norte del país conforme se señaló previamente. Pero desde finales del año 2018, el ELN estaría apostado en inmediaciones del sector del Reversadero, en donde tendría presencia militar efectiva y ya estaría haciendo reuniones de adoctrinamiento con la comunidad de ese sector, situación que también confirmaría su interés de hacerse a un espacio en las dinámicas de la ilegalidad en Bello.


En consecuencia, el escenario de riesgo en la vereda Potrerito y los sectores más altos de Nuevo Jerusalén, como El Reversadero, Torre 11 y Las Cosechas, estaría determinado por la alta probabilidad de que el ELN junto con una línea de Pachelly, decidan atacar a la Oficina del Doce para arrebatárle el control de este territorio limítrofe entre Bello y Medellín, con el objetivo de avanzar en este estratégico corredor de movilidad para las estructuras armadas ilegales de la región. Esto impactaría enormemente los DDHH de la población civil, como quiera que tal escenario de confrontación puede traducirse en una nueva oleada de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, torturas y masacres, graves vulneraciones que no se observan en estos territorios desde hace aproximadamente cinco (5) años.

### III. CONDUCTAS VULNERATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH

#### Atentados contra la vida e integridad personal

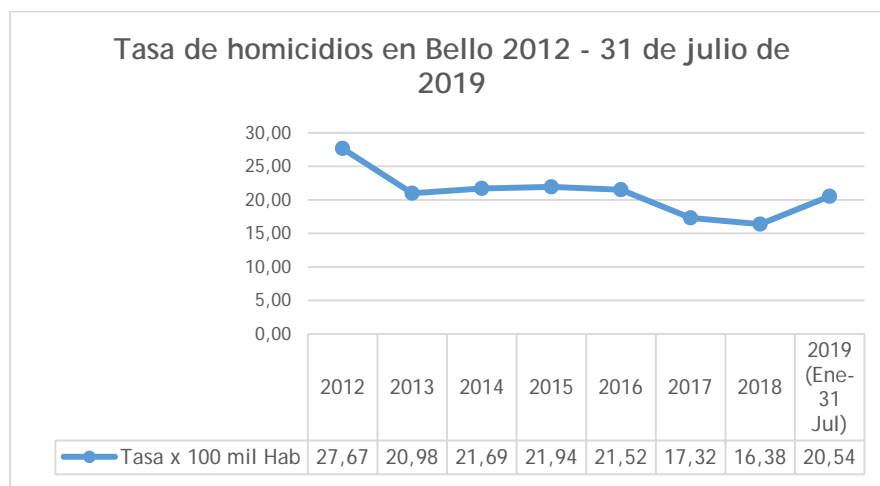
#### HOMICIDIOS SELECTIVOS Y DESAPARICIONES FORZADAS

La principal vulneración del derecho a la vida en Bello, durante el año 2019, es el homicidio. El aumento en el número de eventos es algo inusitado en la última década en este municipio. De hecho, según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante los años 2017 y 2018 fueron asesinadas 80 y 78 personas, respectivamente, lo que representa una tasa promedio de 17 homicidios por cada cien mil habitantes, una reducción muy significativa teniendo en cuenta que para el año 2016 la tasa era de 23 homicidios por cada cien mil habitantes y ya venía en un proceso significativo de

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

disminución desde el año 2012, donde la tasa era de 27 homicidios por cada cien mil habitantes.

Los datos de la Policía Nacional relacionados no divergen de los aportados por Medicina Legal. Conforme se puede observar en la siguiente gráfica, no se descarta que, al finalizar el presente año, la tasa de homicidios pueda sobrepasar aquella evidenciada para el año 2012, si las autoridades no emprenden acciones de prevención humanitaria:



*Elaboración propia - Datos procesados de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, las proyecciones poblacionales del DANE y los resultados del Censo 2018*

Por ese motivo, el año 2019 presenta un comportamiento que distorsiona completamente la tendencia de reducción de la tasa de homicidios que venía reportándose en Bello. Según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 ocurrieron 99 asesinatos en jurisdicción de este municipio, casi un 160,5% más que en el mismo período del 2018, cuando se registraron 38 homicidios<sup>24</sup>. Se trata entonces de un incremento dramático, que continúa en ascenso y que constituye un indicador relevante de una transformación sustancial del contexto de amenaza, conforme se describió ampliamente en el apartado anterior.

A continuación, se relacionan los barrios y veredas donde la Policía Nacional ha documentado la ocurrencia de homicidios entre el 1º de enero y el 31 de julio de la presente anualidad. En el mapa que secunda la tabla se puede evidenciar cómo la mayoría de estos eventos se superpone con las zonas que integran el primer escenario de riesgo del contexto de amenaza descrito:

<sup>24</sup> Datos obtenidos de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, con corte al 31/07/2019. Disponible en: <https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva>

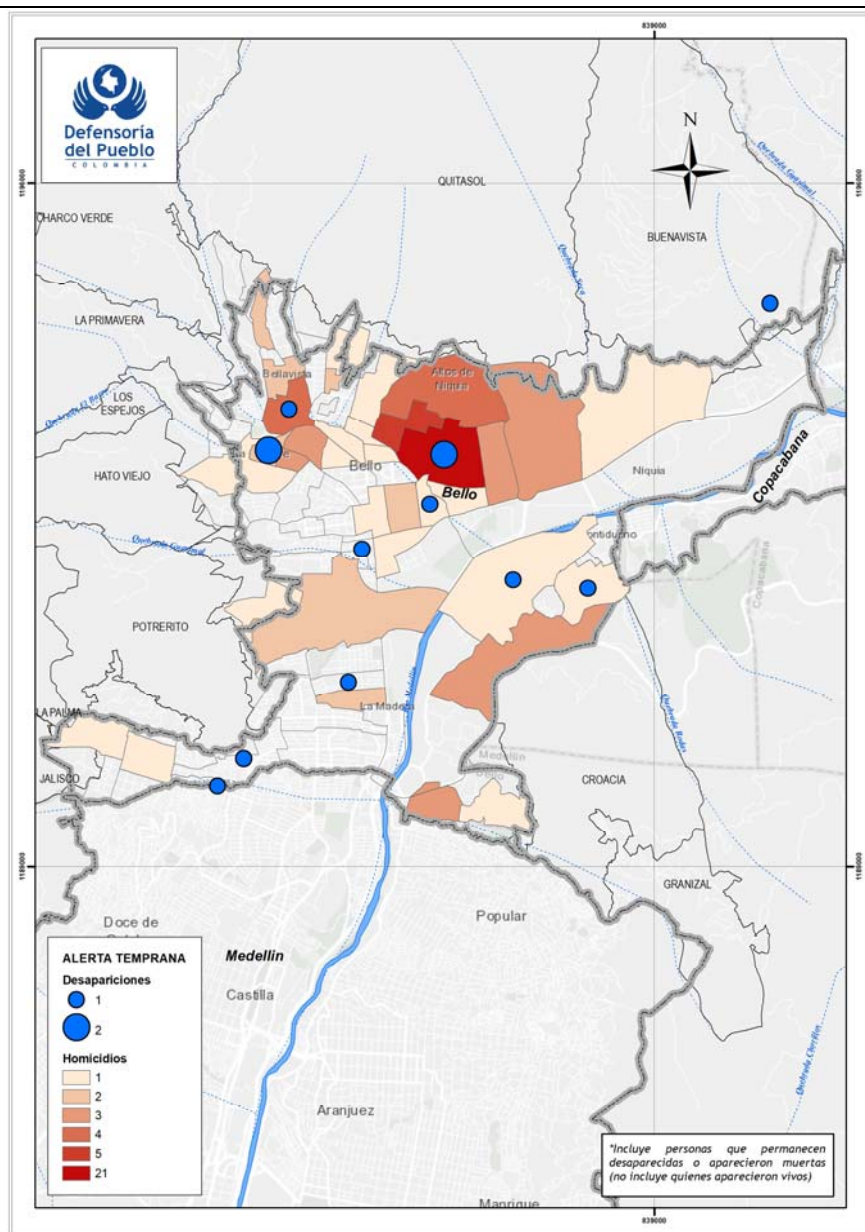
## ALERTA TEMPRANA

Zona	Barrio O Vereda	Total
Rural	Autopista Med Bogota	2
	Vda. El Pinar	2
	Vda. Guasimalito	1
	Vda. La China	1
	Vda. San Felix	1
	Via San Pedro	1
Total Rural		8
Urbana	Acevedo	3
	Altos de Niquia	4
	Autopista Med Bogotá	2
	Barrio Mesa	1
	Bellavista	2
	Buenos Aires	3
	Ciudad Niquia	21
	Ciudadela del Norte	3
	El Cairo	1
	El Congolo	2
	El Ducano	2
	El Mirador	1
	El Paraiso	2
	El Porvenir	1
	La Camila	1
	La Cumbre	3
	La Florida	2
	La Gabriela	3
	La Milagrosa	1
	La Selva	1
	Las Granjas	1
	Las Vegas	1
	Los Alpes	1
	Los Sauces	1
	Manchester	1
	Navarra	1
	Niquia Bifamiliar	5
	Niquia Quitasol	3
	Panamericano	1
	Paris Central	1
	Playa Rica	4
	Prado	2
	San Martin	2
	Santa Rita	1
	Santana	2
	Serramonte	1
	Zamora	3
	Zona Centro	1
Total Urbana		91
Total General		99

*Datos procesados por el SAT.*

*Fuente: Estadística Delictiva de la Policía Nacional con corte al 31/07/2019.*


## ALERTA TEMPRANA



Cabe anotar que algunas prácticas que acompañan la ejecución de homicidios en Bello parecen estar dirigidas a instaurar el terror generalizado entre la población. La principal modalidad es el sicariato, con armas de fuego y utilizando motocicletas para la comisión del hecho; en estos casos, por el número de disparos y lugar de los impactos, sus perpetradores transmiten posibles mensajes de retaliación.

En cuando al tipo de armas que se emplean, en su mayoría son cortas, aunque en varios homicidios se han utilizado armas largas, en particular cuando el objetivo se encuentra dentro de un grupo de personas, o cuando se pretende asesinar a más de un objetivo. En estos casos la violencia, al ser indiscriminada, puede afectar a transeúntes u otros individuos.



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Conforme se refirió con anterioridad, Bello es un epicentro importante del mercado negro de las armas ilegales. Por las rutas donde sale la cocaína estarían ingresando armas al territorio; por ello, en la medida en que las organizaciones armadas ilegales de este municipio tengan un lugar preferente en la exportación de droga hacia Centroamérica con destino a Estados Unidos, también tienen un lugar privilegiado en el ingreso de armas de contrabando introducidas por carteles mexicanos. Solo en el Valle de Aburrá, según ha manifestado el Gobernador de Antioquia, “se han decomisado casi 450 armas, todas nuevas, listas para disparar, en uso y la mayoría de estas armas están viniendo de fabricación americana”, quien agregó que lo que más le preocupa es que las armas pasen de Estados Unidos a México y de allí lleguen al país”<sup>25</sup>.


En menor medida se han registrado homicidios ocasionados por arma corto punzante o por objetos contundentes. Estos asesinatos reportan un nivel de sevicia mayor, como el caso de un mensajero de un depósito de materiales, que fue encontrado con su cabeza cercenada dentro del vehículo que utilizaba para la entrega de los domicilios, hallado el 19 de marzo de 2019 en Niquía. En estos casos, lo general es que previamente se haya presentado el secuestro o retención de la persona, como en el caso del taxista que salió de su casa en la mañana del 31 de marzo a trabajar y fue hallado sin vida, desnudo y con signos de golpes contundentes el 1º de abril, en horas de la tarde, dentro del propio taxi que se encontraba sobre un vía principal de Niquía. Este tipo de víctimas usualmente son encontradas envueltas en plásticos y bolsas, o contenidas en otro tipo de elementos, como el cuerpo masculino hallado con signos de tortura al interior de una nevera, en la mañana del 10 de mayo.

Incluso, la Gobernación de Antioquia ha aducido que los actores violentos han alimentado animales con los cuerpos de sus víctimas<sup>26</sup>, en lo que parece constituir una clara intencionalidad de desaparición forzada con el propósito de mimetizar la magnitud de los atentados contra la vida e integridad personal que allí estarían teniendo lugar.

Cabe anotar que, de los 33 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas en Bello entre el 01 de enero y el 19 de agosto de la presente anualidad, cuatro (4) aparecieron muertas y ocho (8) más continúan desaparecidas, según información a disposición del Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal (SIRDEC):

<sup>25</sup> <https://www.bluradio.com/judicial/bandas-criminales-del-valle-de-aburra-se-estarian-abasteciendo-con-armas-de-eeuu-antq-214752-ie1994153>. Consultado 17 de mayo.

<sup>26</sup> Cfr. Revista Semana, *En Bello estarían alimentando cerdos con restos de personas asesinadas*, 16/07/2019, Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-bello-estarian-alimentando-cerdos-con-restos-de-personas-asesinadas/623784>

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

**Personas reportadas como Desaparecidas en Bello  
según estado de desaparición y sexo**

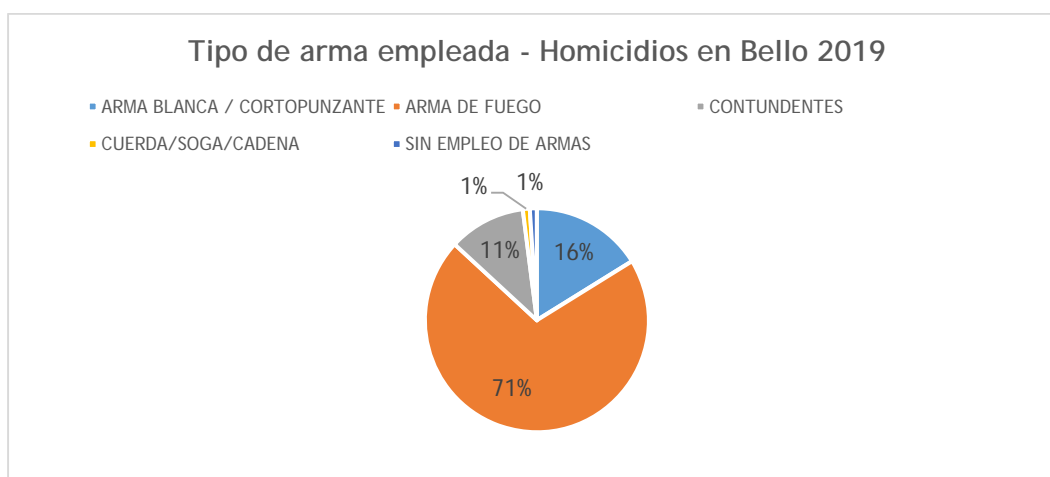
Etiquetas de fila	F	M	Total general
Aparecido Muerto	1	3	4
Aparecido Vivo	5	16	21
Desaparecido	3	5	8
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>

*Datos procesados por el SAT*

*Fuente: SIRDEC - Medicina Legal. Corte 19/08/2019*

Actualmente, se ha conocido el caso de un adolescente desaparecido presuntamente de manera forzada en jurisdicción del municipio. Se trata de un menor de 15 años<sup>27</sup> con limitaciones cognitivas, que se movilizaba en motocicleta por inmediaciones de la Clínica del Norte en Niquía, quien fue raptado luego de que hombres armados lo abordaran y asesinaran a otra persona mediante un ataque sicarial. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.

Respecto al comportamiento estadístico del tipo de arma empleada en los casos de homicidio puede observarse en los datos aportados por la Policía Nacional que en su mayoría estos eventos han sido perpetrados con arma de fuego, seguidos por arma blanca y contundente:



*Elaboración propia - Datos procesados de la Estadística Delictiva de la  
Policía Nacional. Corte 31/07/2019*

El perfil de las víctimas de homicidio es primordialmente de adolescentes y hombres entre los 14 y 57 años, conforme se puede observar a continuación:

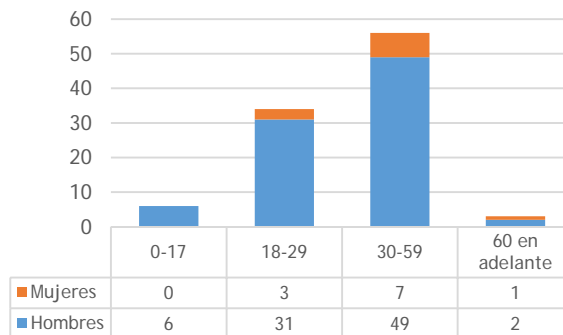
<sup>27</sup> La identidad de la víctima y demás datos sobre los hechos que rodearon su desaparición pueden ser consultados en el Registro SIRDEC con No. De Radicado 2019D001319.

## ALERTA TEMPRANA

Versión: 01

Vigente desde:  
07/09/2018

Homicidios en Bello Ene - 31 Jul en  
Bello, según sexo y rango etario




*Elaboración propia - Datos procesados de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional con corte al 31/07/2019*

De los datos referidos se observa con preocupación que seis (6) adolescentes entre los 14 y 17 años han sido víctimas de homicidio hasta el 31 de julio del presente año en el municipio de Bello. Así mismo, Hasta el mes de julio se habían producido al menos once (11) asesinatos en los que la víctima era una mujer.

En dos casos las mujeres fueron halladas en fuentes de agua, lo que permitiría suponer una posible intencional de desaparición forzada: Una de las mujeres fue encontrada el 13 de marzo en el río Medellín, a la altura de Acebedo. Por su parte, el 29 de mayo, fue hallado el cuerpo completamente desnudo y sin vida de una mujer de 47 de años, que había sido apuñalada. Se estima que los perpetradores de este hecho habrían tenido el propósito de lanzar su cuerpo a una quebrada en una zona de matorrales en el barrio Los Búcaros. Por la forma en que fue encontrado su cuerpo, no se desestima que haya podido ser víctima de violencia basada en género.

Otro asesinato cometido contra una mujer tuvo lugar el 04 de marzo del presente año. El día en mención, ella y su cuñado fueron víctimas de un presunto ataque sicarial al interior de su residencia. Al parecer, esta mujer había llegado al sector de La Gabriela en calidad de desplazada forzada y proveniente de la Comuna 13 de Medellín, por amenazas contra su vida provenientes de grupos armados ilegales; al parecer había dado a conocer esta situación a las autoridades.

Varios homicidios han estado dirigidos contra personas de la población civil que en principio nada tendrían que ver con esa conflictividad violenta, como el caso de un empleado de una empresa de mensajería que, mientras realizaba una entrega en una portería de una urbanización en Araucarias fue ultimado, al parecer porque lo confundieron con integrante de una estructural ilegal que había traspasado la frontera, hecho que se registró el 4 de mayo de 2019. O el de un entrenador de rugby que, llegando a su casa a las 9 de la noche, quedó atrapado en el fuego cruzado que le produjo la muerte el 25 de marzo del presente año en Niquía.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

La violencia en Bello también ha cobrado la vida de comerciantes, empleados de oficios varios, mensajeros, estudiantes, amas de casa, ex agentes de Policía, entre otros grupos poblacionales. Son varias las víctimas que han perdido la vida por cruzar fronteras entre barrios, por no pagar extorsiones, por ser familiar/es de un señalado integrante de las estructuras armadas, por ser señalados como informantes o por quedar expuestas en medio de un intercambio de disparos.

Relacionado con lo anterior, otra modalidad de homicidio que ha conculcado gravemente los derechos a la vida e integridad de la población civil es la provocada por caravanas de motociclistas que, armados, incursionan en los barrios en donde habitan sus contrapartes ilegales, abriendo fuego indiscriminadamente contra la población civil. Uno de los casos de mayor gravedad fue el homicidio de un adolescente de 14 años, el 21 de mayo de los corrientes. Al mediodía, cuando los estudiantes de la institución educativa Gilberto Echeverry, ubicada en el barrio Buenos Aires, salían de su jornada de clases, desde una motocicleta se abrió fuego indiscriminadamente en su contra, impactando la humanidad de este joven que se aprestaba a participar de una entrenamiento del fútbol. La forma y hora en que se realizó este ataque provocó que de 670 alumnos solo asistieran a clases al día siguiente 70. Con el acompañamiento de la Policía y la Alcaldía la situación se atendió y la mayoría de los estudiantes retornaron a clases durante el transcurso de la semana siguiente.

### Desplazamiento forzado


En relación con el desplazamiento forzado, debe mencionarse que los datos históricos del Registro Nacional de Información -RNI- de la Unidad para las Víctimas (UARIV) muestran que desde antes de 1985 hasta el 1º de agosto de 2019, han sido expulsadas 9.702 personas de Bello. Por otra parte, en este mismo sistema de información se encuentra que a este municipio han arribado 50.008 personas, datos que evidencian que este municipio, si bien es principalmente receptor de población desplazada, también comporta dinámicas de expulsión que representan graves vulneraciones a los derechos de la población.

La UARIV ha señalado en una comunicación allegada a la regional Antioquia de Defensoría del Pueblo, mediante correo electrónico del 6 de junio de 2019 que, entre el 1º de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019, esa entidad recibió un total de 502 declaraciones de familias expulsadas del municipio de Bello, representando un total de 1.572 registros, de los cuales cerca de un 40% fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas (612), mientras cerca del otro 40% (622), de los registros no fueron incluidos, lo que reflejaría una relación de una persona expulsada por cuatro recibidas.

**TABLA 2. COMPORTAMIENTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INDIVIDUAL EN BELLO (2017 - 2018 - 2019)**

2017				2018				2019		Total
Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Trim.1	Trim.2	
134	135	171	152	206	138	192	117	240	87	1.572

*Fuente: UARIV en respuesta enviada al SAT el 4 de junio de 2019.*

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Cabe referir que no se tienen registros de desplazamientos masivos producidos en Bello durante el periodo comprendido entre el 2017, 2018 y 1º de agosto de 2019, que corresponde al que trata la presente alerta temprana. Sin embargo, la información existente permite corroborar la persistencia de los desplazamientos forzados individuales o “gota a gota”, la cual guardaría correspondencia con las dinámicas descritas previamente en el contexto de amenaza.

Adicionalmente, como se puede observar en la tabla suministrada por la UARIV, para el periodo que se viene analizando, el número más alto de registros de expulsión en Bello se ubica durante el primer trimestre de 2019, periodo en el que precisamente se ha reportado el aumento de la conflictividad violenta entre grupos armados ilegales en Bello. Se debe advertir que varias declaraciones del año 2019 aun no son valoradas, que una declaración puede reunir varios hechos victimizantes y que el segundo trimestre del año 2019 solo recoge información correspondiente hasta el mes de abril; no obstante, los 240 registros de enero, febrero y marzo de 2019 muestran una tendencia significativa al aumento, comparando con los mismos meses de los años 2018 con 206 registros y 2017 con 134 registros.


Los registros en mención señalan también que cerca de un 78% de las declaraciones han manifestado que el desplazamiento ocurrido en Bello proviene primordialmente de sus entornos urbanos en el periodo en cuestión. Con una mayor participación en este porcentaje se resalta: París con el 16%, Niquía el 12% y La Gabriela con el 8%. En relación con el entorno rural, la vereda Hato Viejo representa el 33% de los registro, mientras Granizal el 22%, estas dos veredas reúnen la mitad de los casos de desplazamiento en territorio rural.

**TABLA 4. 10 PRINCIPALES BARRIOS - VEREDAS DE OCURRENCIA DE DESPLAZAMIENTOS FORZADOS EN EL MUNICIPIO DE BELLO (2017-2018-2019)**

	Rural	Urbano	N/I	Total
PARIS	0	109	0	109
NIQUIA	1	79	4	84
N/I	21	32	17	70
LA GABRIELA	4	53	0	57
SANTA RITA	0	50	0	50
HATO VIEJO	46	0	0	46
ZAMORA	0	46	0	46
GRANIZAL	30	7	0	37
PACHELI	0	37	0	37
PRADO	0	36	0	36

*Fuente: UARIV en respuesta enviada al SAT el 4 de junio de 2019.*



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

El principal municipio receptor de la población desplazada del municipio de Bello es Medellín, donde se ha tomado un 53%, de las declaraciones de desplazamiento para los años 2017, 2018 y 2019 (hasta el 30 de abril).

El segundo lugar de acogida de la población desplazada de Bello es el propio municipio, con 189 registros, situación que daría cuenta de la forma como la población de este municipio también ha sido víctima de desplazamiento forzado intraurbano. Los sectores de Monteclaro (23), Hato viejo (21), Zamora (17), Niquía (15) y París (13), son los que más víctimas de desplazamiento intraurbano han expulsado en Bello, mientras que El Central (28), París (19), Niquía (16), Hato Viejo (9), Bucaneros (8), son los principales receptores de la población desplazada de manera intraurbana. Por la naturaleza misma de esta conducta, la Defensoría del Pueblo no desestima que pueda existir un alto subregistro en los datos de desplazamiento forzado intraurbano.


Aunque con una pequeña diferencia, las cifras de atención a población desplazada por parte de la Alcaldía de Medellín, de personas procedentes de Bello, son similares a las referidas anteriormente, mostrando también una tendencia al aumento durante los primeros cinco meses del año 2019. Según el Diagnóstico base del Equipo Municipal de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, se evidencia un número importante de hogares y personas atendidas por este hecho victimizante:

Año	Número de hogares desplazados de manera forzosa.	Número de personas desplazadas de manera forzosa.
2017	64	245
2018	105	345
2019	67	209

\*Cifras extraídas del diagnóstico base del Equipo Municipal de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, corte 20 de mayo de 2019.

Según los datos del Equipo de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, durante el segundo semestre del año 2018 y el año 2019 se ha registrado el aumento de casos en: El Pinar, Pachelly, Las Araucarias, Niquía, Niquía Camacol, Buenos Aires, Altavista, La Gabriela, Manantiales.

En lo relacionado con hechos generadores de desplazamiento forzado, el documento enviado por la UARIV da cuenta de que el principal factor entre los años 2017 y 30 de abril de 2019 son las amenazas e intimidaciones con 1.218 registros, pero que también coexisten con declaraciones que tienen más de un hecho victimizante, con 321 registros. La mayoría de las amenazas se producen en contexto urbano con 1.333, y 243 registros refieren a amenazas en contexto rural. Se reportan ocho (8) casos de desplazamiento por factores asociados al reclutamiento, uso y/o vinculación de NNA a grupos armados ilegales. Se registra en menor medida el despojo forzado de bienes inmuebles, en los asentamientos ubicados fuera del perímetro urbano como las veredas Granizal, Hato Viejo y Nuevo Jerusalén, tal y como se expuso en el desarrollo de este documento.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

**TABLA 3. ENTORNO DE OCURRENCIA Y PRINCIPALES CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL MUNICIPIO DE BELLO (2017-2018-2019)**

	Amenazas e intimidaciones	Atentados a bienes e infraestructuras	Atentados a personas	Desapariciones forzadas	Homicidios	Más de una causa	Otra	Reclutamiento forzado y/o vinculación de NNA	Total
Urbano	1.032	4	4	4	5	273	3	8	1.333
Rural	168	0	0	0	0	48	0	0	216
N/I	18	0	0	0	0	0	5	0	23
<b>Total general</b>	<b>1.218</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>321</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1.572</b>

Fuente: UARIV en respuesta enviada al SAT el 4 de junio de 2019.

De lo anterior, se puede inferir también que, si bien en los últimos años se ha mantenido una constante en el desplazamiento forzado desde este municipio, se observa un incremento significativo en el comparativo 2017-2018, pero de igual forma se evidencia que durante los primeros cuatro meses de 2019, las dinámicas de expulsión fueron en aumento, situación que, de continuar así podría rebasar los reportes conjuntos de los dos años anteriores.


Finalmente, es importante destacar que, de acuerdo con datos de la RNI de la UARIV, las víctimas de desplazamiento reconocidas por esa entidad corresponden especialmente a mujeres. También han sido afectadas por este hecho victimizante ciudadanas y ciudadanos que se reconocen como afrocolombianos/as así como algunas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas:

Etiquetas de fila	2017	2018	2019	Total general
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hombre</b>	96	98	28	222
Negro(a) o Afrocolombiano(a)	1	7	2	10
Ninguna	95	91	26	212
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LGBTI</b>		2		2
Ninguna		2		2
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mujer</b>	105	108	52	265
Negro(a) o Afrocolombiano(a)	1	9	5	15
Ninguna	104	99	47	250
<b>Total general</b>	<b>201</b>	<b>208</b>	<b>80</b>	<b>489</b>

*Datos procesados por el SAT  
Fuente: RNI de la UARIV con corte al 01/08/2019*

### Reclutamiento forzado, uso, utilización y otras vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes

El reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una práctica presente en la dinámica de los actores armados ilegales en Bello, aun cuando esta grave vulneración a los DDHH e infracción al DIH suele reportar un importante subregistro en las bases de datos oficiales, particularmente en el contexto urbano, debido a diversos factores:


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

De un lado, porque esta conducta ha sido asociada tradicionalmente con el concepto de niños/as combatientes sustraídos/as de sus familias en un medio rural, razón por la cual, institucionalmente, ha habido dificultades para prevenir o atender NNA en riesgo de reclutamiento o utilización cuando la ocurrencia de esta conducta no supone necesariamente su desescolarización o el alejamiento de su entorno protector inmediato. De otra parte, porque los NNA utilizados por estructuras armadas ilegales son considerados por una parte importante de la institucionalidad local como “menores infractores de la ley penal”, a quienes se les aplica el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), específicamente a aquellos/as que son considerados/as “contraventores/as sorprendidos/as en flagrancia”. En ese segundo escenario, es poco lo que se hace en materia de prevención y protección a favor de la niñez y la adolescencia que tiene un riesgo inminente de hacer parte de las estructuras o que ya han sido víctimas de estas graves vulneraciones.

Como en todos los contextos, no hay cifras que alcancen a dar cuenta de la dimensión de la problemática en cada localidad y Bello no es la excepción. Pese a ello, podrían tomarse en consideración algunos posibles indicadores que también podrían sugerir la ocurrencia de esta conducta:

De una parte, no se descarta que algunos eventos de desplazamiento forzado que involucran a NNA como víctimas hayan podido estar motivados en posibles amenazas de reclutamiento en su contra. Es conocido que las familias de algunos/as NNA, ante el riesgo de ser reclutados o utilizados ilegalmente por diversos actores armados ilegales, toman la decisión de desplazarse, como medida para salvaguardar su vida e integridad. De acuerdo con las estadísticas de la UARIV, el 36,3% de las personas que han sido reconocidas como víctimas de desplazamientos ocurridos en este municipio durante el año en curso son precisamente menores de 18 años, proporción que en 2018 fue similar, con un 38,9%.

Aunque no hay cifras, ni tan siquiera aproximadas del número de NNA que son reclutados y/o utilizados por grupos armados ilegales en Bello, sí existen otros datos cuantitativos que muestran un número muy alto de NNA a los que le han sido vulnerados sus derechos en este territorio del norte del Valle de Aburrá. El SAT de la Defensoría del Pueblo solicitó al Centro Zonal de Bello del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), información sobre el número de procesos de restablecimiento administrativo de derechos para esta población en el municipio de Bello, quienes muy gentilmente respondieron la consulta en correo electrónico dirigido a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia el día 12 de agosto de 2019. En la respuesta allegada se discrimina el número de población que accede a las diferentes rutas de restablecimiento de derechos:

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

TIPO DE RUTA DE PROTECCION POR MOTIVO DE PETICION NNA	#	GENERO		
		F	M	Varios/No reporta
Abandono	18	14	5	3
Abuso sexual/Violencia sexual	224	123	26	71
Articulacion con entidades del SNBF	4	4	0	0
Consumo de sustancias psicoactivas	54	43	13	0
Convivencia educativa	22	11	7	8
Explotacion sexual comercial ESCNNA	13	12	0	3
Hechos victimizantes en el marco del conflicto armado	15	11	5	3
Maltrato fisico psicologico negligencia	462	157	47	220
Problemas de comportamiento	86	61	11	16
Situacion de trabajo infantil	25	4	5	18
Situacion de vida en calle	31	19	12	4
Solicitud de cupo en modalidades de proteccion diferente a hogar gestor (otras autoridades)	98	75	25	0
Solicitud de cupo en modalidades de proteccion hogar gestor (otras autoridades)	4	4	0	0


*Fuente: Centro Zonal ICBF Norte del Valle de Aburrá: Consolidado de Peticiones al ICBF 1 de enero de 2019 a 30 de junio de 2019, según el Sistema de Información Misional ICBF.*

Es muy alta la demanda de rutas de protección para el restablecimiento de derechos de NNA en el municipio de Bello. Pero la mayoría de vulneraciones de DDHH de NNA no son asociadas a causas propias del conflicto armado que actualmente soporta esa localidad, la mayoría de vulneraciones se dan en el contexto familiar o en otros espacios cercanos de socialización como la cuadra del barrio o la escuela. Solo 15 podrían estar asociados directamente al conflicto armado. Pero llama la atención que rutas derivadas por maltrato físico psicológico y negligencia, con 462 registros y abuso y/o violencia sexual con 224 registros, sean las preponderantes, lo que da cuenta que las principales vulneraciones no son por actores armados sino por una violencia intrafamiliar o social cercana. Lo grave es que son estas violencias estructurales las que provocan víctimas en el entorno familiar y escolar que luego pueden ser el caldo de cultivo para el reclutamiento, uso y/o vinculación de los NNA a grupos armados ilegales en el municipio de Bello.

A pesar de las dificultades que suponen los datos cuantitativos para dimensionar el alcance de la problemática del reclutamiento, uso y/o vinculación de NNA en estructuras armadas ilegales, algunos hechos monitoreados por el SAT de la Defensoría del Pueblo permiten ilustrar cómo esta vulneración a los derechos de NNA también forma parte de los repertorios de violencia de los actores armados ilegales con intereses sobre el municipio:

El 25 de marzo de los corrientes, en el barrio Guyana (ubicado en la Comuna 6), cuando una patrulla de la Policía realizaba labores de control en respuesta a informaciones de inteligencia que manifestaban que desde allí se estaría organizando un atentado, ésta fue hostigada con disparos provenientes desde el interior de una residencia, lo que motivó un operativo sobre la misma. Cuando la fuerza pública incursionó en la residencia encontró a cinco (5) adolescentes y un niño de 13 años, portando armas cortas. Acto seguido, fueron capturados.

Esta situación, si bien da cuenta de la instrumentalización de NNA por parte de los actores armados ilegales que operan en el municipio de Bello, permitió identificar que esta grave vulneración a sus derechos tuvo lugar incluso sin remuneración alguna: Cuando los NNA capturados fueron conducidos a la estación de policía, estos les solicitaron a los agentes

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

algo de comida, ya que manifestaban no haber consumido alimentos desde hace varios días.

Cabe anotar que posteriormente, a la misma instalación de Policía, también fue conducida una mujer capturada en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas, y allí se encontró con uno de los adolescentes del cual se conoció era su hijo. Esta situación reflejaría las profundas brechas de protección que afrontan usualmente los NNA víctimas de utilización ilícita o reclutamiento forzado.

Es importante referir que los NNA también son utilizados en Bello para ejecutar acciones sicariales, como la ocurrida el 02 de mayo al medio día en Niquía. En aquella oportunidad, tres menores de edad, que se movilizaban en bicicletas, atentaron contra la vida de un ciudadano. Los policías cercanos al sitio alcanzaron a reaccionar emprendiendo una persecución en medio de una balacera que alteró la tranquilidad de los transeúntes. Los perpetradores fueron capturados, los tres menores de 18 años.

Aunque no haya datos oficiales sobre el reclutamiento, uso y/o utilización de NNA por parte las organizaciones armadas ilegales en Bello, es claro que esta vulneración existe y que es más recurrente de lo que reportan los datos institucionales. En consecuencia, urge a la acción institucional adelantar medidas que permitan apartar a los NNA del conflicto armado y de las diversas expresiones de violencia presentes en este municipio, con el fin de evitar su victimización.

Para tal efecto, los NNA no pueden ser observados por la institucionalidad sólo como transgresores de la ley, pues ante las dimensiones propias del contexto de amenaza expuesto, y al presumirse generalizadas y especialmente gravosas para este sujeto de especial protección constitucional, se demanda el despliegue de acciones preventivas dirigidas a fortalecer sus entornos protectores y mitigar las condiciones de vulnerabilidad que les exponen a ser reclutados o instrumentalizados por los diversos actores armados ilegales que tienen presencia en las diversas comunas y veredas del municipio.


#### **Amenazas y otros métodos para generar terror en la población civil**

Las dos principales estrategias utilizadas por los actores armados ilegales para generar terror dentro de la población civil en Bello están asociadas a: las prácticas que estos emplean durante la comisión de los homicidios y los mensajes amenazantes que profieren en contra de los/as habitantes del municipio con el propósito de favorecer su control.

Respecto a la primera modalidad, esta ya fue descrita en el respectivo acápite sobre homicidios, a partir de la sevicia de los asesinatos perpetrados como mensaje atemorizante para las familias de las víctimas, sus vecinos, la comunidad en su conjunto y, por supuesto, los integrantes de las estructuras y grupos ilegales con quienes disputan su dominio.

Respecto a la segunda modalidad, las principales formas de transmitir los mensajes intimidantes son los panfletos físicos difundidos en la comunidad, abordajes directos a las



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

víctimas y comunicados distribuidos por redes sociales. El común denominador de este tipo de amenazas es que suelen ser mayoritariamente colectivas y genéricas.


La distribución de panfletos ha sido elevada en el marco del actual contexto de amenaza en Bello e involucra principalmente a los siguientes grupos y estructuras armadas ilegales: Pachelly, El Mesa, Niquía Camacol y El Tapón. En estos, se observan características y contenidos similares a los empleados por los grupos armados ilegales en zonas rurales del país; sin embargo, en el contexto de disputa territorial que se predica de algunas comunas de Bello, este tipo de comunicaciones tienen como propósito, de una parte, generar terror contra quienes consideran sus enemigos y mellar su moral, toda vez que suelen dirigirse contra familiares y seres queridos de supuestos miembros de sus contrincantes, a los que les auguran una muerte violenta, no sin antes hacer alarde de un manejo tal de la información, donde insinúan que conocen todos los movimientos del objetivo y sus familias.

Tal dinámica supone un claro escenario de riesgo para estas personas ante posibles atentados, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados. El riesgo puede ser mayor para las mujeres y adolescentes que puedan ser señaladas como parejas sentimentales de supuestos integrantes de las estructuras armadas ilegales en contienda o de la fuerza pública. Ellas pueden verse expuestas ante posibles actos de violencia sexual o tortura en su contra, al preconcebir su cuerpo como botín o “blanco legítimo” para llevar a cabo sus retaliaciones.

A los anteriores panfletos se suman también mensajes dirigidos directamente contra el conjunto la población civil de un sector determinado, al que se considera supuesto benefactor del enemigo. Estos panfletos profieren amenazas generalizadas en donde se advierte sobre enfrentamientos, restricciones y la imposición de horarios para la movilidad. Allí también efectúan señalamientos -de igual forma generalizados- sobre barrios vecinos. Este tipo de mensajes, aunque genéricos y anónimos, son los que generan mayor temor entre la comunidad, pues logran afianzar los mecanismos ejercidos por los actores y grupos armados ilegales para generar control poblacional.

Otro tipo de comunicados son cartas abiertas, en donde los jefes de las estructuras ilegales intentan explicar su posición frente a la comunidad y el porqué de su guerra con el enemigo.

Los panfletos son utilizados también para amenazar a personas vinculadas con los sectores económicos presentes en el municipio de Bello, en el marco de posibles propósitos extorsivos. Han amenazado desde una importante empresa multinacional de automotores hasta a los comerciantes tradicionales de zonas céntricas de Bello. Con relación a este último caso, desde el 22 de mayo circuló un panfleto sin suscripción en donde se declara objetivo militar a doce (12) establecimientos comerciales, que son señalados en el propio panfleto de suministrar armas bajo intimidación a un grupo armado ilegal señalado como El Mesa. En los siguientes días, unos locales se vieron forzados a cerrar temporalmente y otros negaron tajantemente su participación en el conflicto violento y convocaron a la ciudadanía a no dejarse intimidar. Esta amenaza ha provocado una reducción significativa

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

en los ingresos de estos establecimientos comerciales y otros cercanos, según han señalado versiones comunitarias.

Cada vez que aparecen estos comunicados, las autoridades suelen cuestionar su “veracidad”, aduciendo que su objetivo es generar zozobra dentro de la comunidad, como si con ello no existiese riesgo alguno de materialización de la amenaza en términos de la vulneración de los derechos de las víctimas. Ante los impactos selectivos y generalizados que puede ocasionar -y *per se* genera- la proliferación de este tipo de amenazas sobre los/as habitantes de las comunas y veredas, es necesario que las autoridades de Policía y Fiscalía, tanto locales como regionales, articulen sus acciones para determinar posibles responsables individuales e impulsen su judicialización. Paralelamente, el riesgo que conlleva esta práctica generalizada sugiere la apremiante necesidad de fortalecer los mecanismos municipales y departamentales de prevención y contingencia, a fin de coadyuvar en una respuesta protectora oportuna del Estado a favor de quienes sean víctimas de amenazas.


En contraste con las amenazas generalizadas y genéricas, se identifican también acciones intimidatorias directas contra otros grupos poblacionales. Como población vulnerable ante las amenazas directas se debe señalar también a la población docente del municipio de Bello. Se conocen los casos de al menos tres docentes amenazados por grupos armados ilegales que operan cerca de centros educativos en este municipio, según denuncias públicas del presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA)<sup>28</sup>. La Defensoría no descarta que este fenómeno pueda estar asociado a las dinámicas de reclutamiento y uso ilícito de NNA emprendidas por los diversos actores armados ilegales, con el fin de socavar los entornos protectores educativos.

Adicionalmente, es menester referir que, en el marco del proceso electoral, se ha conocido la existencia de amenazas contra candidatos. Concretamente, se conoce que el señor JUAN FELIPE RESTREPO, candidato a la alcaldía de Bello, habría recibido amenazas directas contra su vida -extensivas a miembros de su familia- a mediados de febrero del corriente, luego de oponerse a la reubicación de comerciantes en la plaza de mercado del centro de la ciudad. Esta situación forzó su desplazamiento durante cuatro meses, período luego del cual él regresó con el fin de continuar sus actividades proselitistas. No obstante, ha aducido temor ante la presunta falta de acompañamiento en materia de protección a su favor.

#### Cobro de extorsiones

Conforme se refirió anteriormente, tanto en los escenarios de riesgo existentes en las Comunas 4, 6, 7 y 8 como en los asentamientos informales objeto de advertencia los actores armados ilegales han hecho de la extorsión uno de sus repertorios de violencia más significativos. Por medio de esta conducta, además de vulnerar gravemente los

<sup>28</sup> <https://www.lafm.com.co/colombia/profesores-en-bello-antioquia-estan-siendo-amenazados-por-grupos-criminales>.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

derechos a la libertad, seguridad e integridad de los habitantes y comerciantes, han pretendido reafirmar lealtades e imponer dispositivos de control social.

El cobro de exacciones sobre la población se realiza sobre una multiplicidad de bienes y servicios que se suministran en el municipio: Desde el suministro de agua en los asentamientos informales, hasta bienes básicos de la canasta familiar como los huevos, las arepas, las carnes frías, los minutos de celular, incluso el gas -cuyas pipetas son llenadas con menor cantidad- como sucede en Granizal por parte de la banda de San Pablo. Además, extorsionan todo tipo de actividad económica que se pueda desarrollar en la vereda, como el transporte público, el comercio, a los productores y transportadores de cebollas, incluso, si se enteran de que una persona tiene un contrato laboral, esta se ve forzada a declarar y entregar el 10 por ciento de su ingreso al actor armado, conforme han referido diversas fuentes comunitarias.

Además de este tipo de extorsiones, se ha conocido que el auge del sector inmobiliario en el municipio, así como la informalidad y la especulación en los usos del suelo urbano también han sido factores de vulnerabilidad que han propiciado el cobro de exacciones.

Dentro de la planicie inclinada del perímetro urbano de Bello, las principales estructuras beneficiadas por este factor han sido Los Chatas, Pachelly, Niquía Camacol y El Mesa.


Las estructuras armadas ilegales extorsionan en los proyectos que se desarrollan en toda la jurisdicción del municipio de Bello a las constructoras de varias formas: solicitando el pago de seguridad violenta, exigiendo puestos de trabajos para personas cercanas a la organización ilegal, pero lo más recurrente, y lo que les deja una enorme renta, es la solicitud de un número determinado de apartamentos, según el número de unidades del proyecto. Algunos testimonios mencionan que una unidad residencial puede exigir hasta 10 apartamentos, o también está la modalidad de recibir dinero en efectivo.

La actual escalada de violencia en Bello ha vuelto a evidenciar la permanencia de esta práctica de la que no se tienen estimaciones sobre el ingreso que les ha generado a las organizaciones ilegales y que puede ser incluso superior a los del narcotráfico.

Pero el aprovechamiento del auge inmobiliario no solo fue sobre la construcción formal y la inversión de grandes proyectos por empresas ampliamente reconocidas. En la periferia, en suelo de expansión urbana, rural o simplemente en donde el POT prohibió la edificación de residencias, el beneficio de los grupos armados ilegales se hizo de otra forma. Conforme se refirió con anterioridad, esto tuvo lugar mediante la venta ilegal de lotes, especialmente a población desplazada que no tenía otra forma de subsistir en el Valle de Aburrá, situación que fue aprovechada por organizaciones procedentes especialmente de Medellín, como la Oficina del Doce de Octubre en Nuevo Jerusalén, San Pablo en Granizal y Los Triana en La Gabriela y Santa Rita.

El mismo Gobernador de Antioquia ha puesto de presente esta situación en un consejo extraordinario de seguridad realizado el 1 de marzo de 2019<sup>29</sup>. Su denuncia fue ampliada

<sup>29</sup> <https://noticias.caracoltv.com/antioquia/comando-especial-de-seguridad-urbana-combatira-los-criminales-en-bello>

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

por un Representante a la Cámara de Antioquia en el Consejo de Seguridad presidido por el Ministro de Defensa y realizado en Bello el 16 de abril del presente año, en donde denunció la especulación sobre los coeficientes de densidad de unidades de construcción, por encima de la permitidas para compensar la entrega de inmuebles a estructuras criminales, así como irregularidades en los dineros y obras de compensación urbana que deben entregar las constructoras al espacio público. No obstante, en todo momento se evidencia la falta de denuncias formales para una actividad ilícita que dejó hace mucho rato de ser invisible en Bello.


### **Enfrentamientos con interposición de población civil**

El conflicto armado que actualmente se observa en el municipio de Bello, se expresa en un escenario preponderantemente urbano. En esa medida, no es un tema menor que un conglomerado urbano, sobre un área que no representa una inclinación de más de 200 metros ascendentes sobre el río Medellín y altamente densificado, pueda ser el epicentro de enfrentamientos con armas largas, por cuanto esto representa riesgos de violencia indiscriminada y otras afectaciones sobre los/as habitantes del municipio, por cuenta de la interposición de la población civil en diversas acciones armadas. Videos que han circulado ampliamente en redes sociales, han mostrado balaceras con fusil en barrios cercanos a un reconocido centro comercial del municipio, por ejemplo.

Como se dijo anteriormente, cuando el objetivo es individual y abstraído de conglomerados humanos, el arma corta ha sido la preferente. Pero cada vez que el objetivo es colectivo y se encuentra rodeado por varias personas, los actores ilegales utilizan armas largas con el propósito de realizar un ataque indiscriminado sin importar el número de víctimas. Por ese motivo, en Bello no solo han aumentado las víctimas de homicidio, sino también el número de lesionados por arma de fuego, entre quienes estarían personas heridas por armas largas.

También hay otro modo en el que personas que no son objetivo de las estructuras armadas ilegales pueden resultar afectadas en su vida e integridad en medio de atentados: se trata de familiares o parejas afectivas de estos sujetos y que pueden resultar gravemente lesionadas o perder su vida solo por estar en compañía de estas personas. En este tipo de ataques, las mujeres compañeras afectivas de hombres asesinados han sido las principales víctimas.

Conviene anotar que uno de los hechos de violencia con interposición de la población civil tuvo lugar el martes 30 de julio, aproximadamente a las 5:30 pm, en el barrio Niquía. En esa ocasión, tuvo lugar ataque armado contra un presunto líder de la estructura Pachelly, suceso en el que dos personas de 31 y 32 años murieron y dos más habrían resultado heridas, entre quienes se encontraba un niño de cinco años aproximadamente. Casi de manera simultánea a este evento, se conoció la circulación de un audio anónimo por redes sociales mediante el cual se imponían restricciones a la movilidad a partir de las 9 pm.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

#### IV. FACTORES DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES

El fuerte control ejercido por distintos actores armados ilegales en Bello, se debe a tres factores estructurales de vulnerabilidad que se pueden identificar a partir de la última década, a saber: 1. La especulación y los cambios sobre el uso del suelo; 2. Los problemas demográficos, de ingresos públicos y de suministro de servicios en el municipio y 3. Los problemas socioeconómicos en los asentamientos informales y 4. Algunas brechas en la disposición de herramientas para garantizar la prevención, protección y seguridad ciudadana.

##### *1. La especulación y los cambios sobre el uso del suelo*

No existe evidencia que permita deducir que los grupos armados ilegales hayan incidido directa o indirectamente en la formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-Acuerdo 033 de 2009. Pero sí hay suficientes indicios que permiten establecer que estas organizaciones se han beneficiado económicamente a partir de la definición de los usos del suelo, algo que como se estableció más arriba, ha contribuido a mantener los acuerdos de distribución del control territorial de la ilegalidad en Bello.


De una parte, la informalidad en los usos del suelo en los sectores periféricos del municipio ha configurado un importante factor de vulnerabilidad para la población, frente a fuertes mecanismos de control ejercidos por los actores ilegales ante las brechas de la oferta institucional en el territorio.

La falta de una respuesta institucional oportuna para prevenir el desbordamiento de la ocupación irregular del suelo y el despojo en zonas como Nuevo Jerusalén ha conllevado altos costos para este municipio. Debido a la acción popular mencionada en anteriores apartados, y otras disposiciones recientes, el municipio de Bello ha visto reducido enormemente su presupuesto de inversión de libre destinación en el pago de indemnizaciones, pues el fallo recoge al menos 2.100 familias a las que se les debe dar una solución de vivienda en condiciones de dignidad y seguridad.

A la fecha, van al menos 150 desalojos y a las alcaldías de Bello y Medellín les corresponde asumir los subsidios de vivienda hasta entregar esa solución definitiva de vivienda, proyecto que aún no es presentado por las administraciones, razón por la que ya se han interpuesto varios incidentes de desacato por el incumplimiento de las órdenes del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad. El cumplimiento efectivo de los fallos de primera y segunda instancias permitirían aliviar la situación social, económica y de seguridad de esta comunidad que presenta muchas carencias, en materia de vías de acceso, de distancia de los centros educativos, de atención de salud, de ingresos mínimos de los habitantes que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y, claro está, de acceso a la justicia<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Alcaldía de Bello, Unión Europea. Plan de Integración Local Nuevo Jerusalén – El Cortado. Bello, 2015. Documento PDF.



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Adicionalmente, las presiones de crecimiento democrático desde Medellín han conllevado a un fortalecimiento del sector constructor e inmobiliario en sus zonas limítrofes con Bello cuyos proyectos, al implementarse en zonas de marcado control de los grupos y estructuras armadas ilegales, han sido objeto de extorsión, como se refirió anteriormente. Previo a la formulación de POT, la construcción de altura no superaba los cinco pisos, pero en la última década han proliferado las torres de más de 20 pisos y muchas sobrepasan los 30, lo que dimensiona la magnitud del crecimiento de este tipo de proyectos.

## ***2. Los problemas demográficos, de ingresos públicos y suministro de servicios en el municipio***


Es difícil explicar cómo un municipio con una tasa de natalidad positiva, con la recepción de cerca de 50.000 personas desplazadas por la violencia desde 1985 en relación con 9.500 expulsadas, y con la construcción de más de 40.000 soluciones de vivienda a partir del POT, tenga como resultado del último censo una cifra muy coincidente con las proyecciones del Censo de 2005, que no recoge ninguna de estas variables.

El elevado número de población concentrada en sectores periféricos no se relaciona únicamente con los cerca de veintidós (22) asentamientos no formalizados existentes en el municipio; esta dinámica también se encuentra vinculada al auge de construcción urbana que ha conllevado el crecimiento de la propiedad vertical<sup>31</sup> y a la construcción de urbanizaciones para miles de personas. Si se contrasta este fenómeno con las estadísticas poblacionales antes referidas, es posible advertir que los registros cuantitativos oficiales no estarían reflejando en sus justas dimensiones el acelerado incremento poblacional de Bello, derivado este de los flujos migratorios propios de las dinámicas del conflicto armado y aquellos provenientes de la acelerada expansión de la población desde la vecina ciudad de Medellín y del aprovechamiento de la urbanización vertical en el casco urbano.

Antes bien, las proyecciones poblacionales vigentes para Bello estarían restringiéndose a las tendencias de las tasas de natalidad, algo que restringe los ingresos del municipio y con ello la posibilidad de generar mayor inversión social en los sectores más necesitados los cuales, como ya fue dicho, están compuestos primordialmente por población en situación de desplazamiento forzado.

A propósito del crecimiento demográfico de Bello, es relevante resaltar que este ha reportado una dinámica álgida desde el siglo XX, pero en particular a partir de las últimas cuatro décadas. Para el año de 1938, la población de Bello era de cerca de 13.500 personas. La instalación de la industria textil, mecánica y de bebidas promovió este incremento de la población, ya que según el Plan de Desarrollo Cultural 2008 - 2018, de cerca de 5000 residentes dedicados a la agricultura en 1913, esta población casi se triplicó quince (15) años después. Desde entonces, Bello ha sido considerado como un municipio dormitorio de la clase trabajadora, primero de la industria localizada en su territorio y luego, a partir de la década de 1960, de la industria localizada en el sur del Valle de Aburrá.

<sup>31</sup> Es decir, de aquella compuesta por varias viviendas o locales que comprenden una única propiedad.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

La expansión de la urbanización de Bello se puede caracterizar en tres períodos: la urbanización de vivienda de interés social entre los años de 1960 y 1980, los asentamientos informales, en su mayoría conformados por población desplazada, entre 1990 y 2000, y el crecimiento vertical y de urbanizaciones de clase media y media alta, entre el 2010 y 2019. No obstante, se trata de auges, porque estos tipos de urbanización siempre han estado presentes y se mantienen en el municipio de Bello.


Esto ha representado que los procesos temporales de concentración inmigratoria tengan lugar primordialmente en el seno de una población de recursos económicos bajos. Hasta la década de 2010, casi la totalidad de la población residía en barrios o asentamientos de estratos 1, 2, y 3. Solo a partir del Plan de Ordenamiento Territorial de 2009, se evidenció un incremento de las urbanizaciones de estrato 4, que hasta entonces solo se concentraban en los barrios Cabañas y Cabañitas, en límites con el municipio de Medellín. No obstante, la aparición de vivienda de estrato 4 y muy marginal en estrato 5 (solo en el barrio Norteamérica), no ha mejorado significativamente el recaudo fiscal del municipio que, básicamente concentrando sus cargas impositivas en un 90%, en la población de estratos bajos, no ha logrado alcanzar suficientes tasas tributarias que permitan la compensación fiscal, equilibrando las cargas de inversión entre la población más pobre y la de mejores ingresos.

Luego de expedido el POT por parte del Concejo de Bello una importante área del territorio urbano se habilitó para la construcción de vivienda de clase media, pero a la par crecieron los asentamientos de población de escasos recursos, en su mayoría conformados por las víctimas del conflicto armado en los últimos 25 años en el país. La emergencia de una base social obrera y recientemente desplazada progresivamente fue aprovechada para el fortalecimiento de diversas estructuras armadas ilegales. Desde entonces y hasta la fecha, las estructuras que han tenido presencia en este territorio han utilizado a un número significativo de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica en diversas actividades ilícitas, a tal punto que pocos barrios y veredas de Bello se escapan a de esta dinámica conforme se refirió anteriormente.

Paradójicamente, y en contraste dichas dinámicas de vulnerabilidad, las estadísticas oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ubican a este municipio con un entorno de desarrollo robusto, ocupando el puesto 27 en Antioquia en su índice final de desempeño municipal, configurándose en un indicador alto con relación a la media departamental que muestra un desempeño del 52,6 mientras en Bello es del 70,7<sup>32</sup>.

Aunque el municipio de Bello ha pasado de quinta categoría a primera en menos de cinco años, su capacidad de inversión se ha visto reducida en los últimos tres años por los compromisos que se han derivado del pago de indemnizaciones en el marco de sentencias judiciales en su contra lo que ha reducido los recursos de libre destinación según fuentes de la Alcaldía. Su limitada capacidad fiscal se puede observar en el comportamiento de sus ingresos y gastos per cápita: para 2017 muestran los ingresos per cápita de la nación

<sup>32</sup> <https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/05088>, consultado 30/05/2019

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

en 1.400.000 mientras Bello estuvo en más o menos la mitad, 900.000 pesos per cápita, aunque con un ingreso y gasto sostenido ascendente desde el 2010, cuando el promedio eran los 600.000 pesos<sup>33</sup>. Según las operaciones de caja municipales, el ingreso per cápita de la población bellanita era de 902.525 pesos en 2017, muy por debajo de la región antioqueña que reportaba 1.455.851 pesos y la nación 1.528.056 pesos.


De hecho, con el reciente Censo Nacional del DANE el municipio de Bello pierde habitantes, ya que da un dato de 467.000, 16.000 habitantes por debajo de la proyección del Censo de 2005. Este problema estadístico le impide a Bello ascender a la categoría especial, bajo el criterio del número mínimo de medio millón de habitantes, con el consecuente impacto en la reducción de las transferencias del tesoro nacional y otro tipo de ingresos fiscales que se tasan sobre el número de habitantes, algo que lo limita para invertir en regiones esenciales como el de bienestar social, prestación de servicios básicos, formalización en al menos 22 asentamientos informales, integrados en más de un 80% por población víctima de la violencia que aún no cuenta con medidas definitivas de reparación. Incluso, le impide la inversión de recursos para mejorar los instrumentos de prevención, protección y seguridad ciudadana.

A lo anterior se suma que cerca de la mitad de las familias de los asentamientos de Granizal y Nuevo Jerusalén están afiliadas al SISBEN de Medellín, esto debido a que los centros de atención en salud más cercanos se encuentran en este municipio, algunos también por la ubicación de las instituciones educativas o por la disposición de recursos para las ayudas humanitarias a la población desplazada. Indistintamente del factor, esto también hace que el municipio de Bello pierda recursos para el aseguramiento social en tasas por capitación como ésta.

En materia de cobertura de servicios básicos domiciliarios, el municipio de Bello reporta índices de acceso a un 100% en materia de agua potable, acueducto y alcantarillado. Pero estos servicios no llegan en condiciones de formalidad y calidad a los asentamientos informales conformados principalmente por población víctima del desplazamiento forzado. La ausente gestión del Estado para el suministro de algunos de estos servicios supone un factor de vulnerabilidad para la población civil, en tanto que las diversas estructuras y grupos armados ilegales que ejercen -o pretenden detentar- dominio territorial sobre los barrios, pueden interferir arbitrariamente en esta labor, por medio del cobro de extorsiones y otras cuotas económicas a la población para asegurar su acceso a los mismos.

La vulnerabilidad es especialmente elevada para la población que vive en asentamientos informales como el existente en la Vereda Granizal. Por ello, urge que el Estado comience a prestar los servicios básicos que le corresponden a la ciudadanía de este tipo de asentamientos, partiendo precisamente desde ese lugar la formalización de la tenencia de la tierra y el diseño e implementación de un plan maestro de acueducto y alcantarillado, solo así se ganará la confianza institucional por encima de la intimidación de los armados ilegales.

<sup>33</sup> Ibíd.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Con el ánimo de garantizar el acceso al agua potable, el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia interpuso una acción popular ante la jurisdicción administrativa. El 14 de marzo de 2019 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, falló en favor de la comunidad de Granizal, reconociendo como amenazados “los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente de los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como, el derecho colectivo fundamental al acceso al agua potable de los habitantes de los sectores El Pinar y Manantiales de la vereda Granizal del municipio de Bello (Ant.)”.

No obstante, los accionantes no quedaron satisfechos en relación con la forma como se ejecutaría el fallo, que ordena la provisión de 50 litros de agua potable diarios por persona, a través del suministro de carro tanques. Esta decisión es difícil de cumplir, ya que no hay un número suficientes de vehículos para suministrar cerca de 1.200.000 litros de agua diarios, a cerca de 24.000 personas que pueden habitar los asentamientos no formalizados de la vereda Granizal, además las vías de acceso no soportarían el flujo de un número tan alto de vehículos pesados. Por esta razón, los accionantes apelaron la decisión al Consejo de Estado, entidad en la que actualmente se encuentra el trámite de la acción popular.

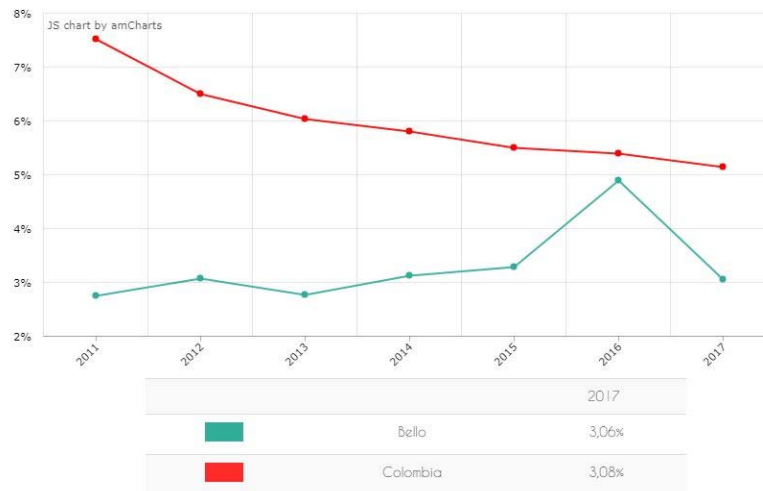
En lo que corresponde a cobertura educativa, según datos del Ministerio de Educación, para el año 2017, Bello tenía una tasa de cobertura bruta de 89,82% y una cobertura neta del 78,45%. Una tasa neta inferior a la media nacional del 85% y a la regional, que para ese año estaba era superior con un 86%. Para el mismo año, la tasa de deserción en este municipio era del 3,06%, muy similar a la media nacional<sup>34</sup>. Aunque el comportamiento de la tendencia de deserción es inferior al evidenciado a nivel nacional, es importante precisar que los datos referidos tienen como fecha de corte el año 2017 -la más reciente a disposición del DNP-, razón por la cual es necesario disponer de una estadística actualizada, entre otros factores, con el fin de analizar si ha habido cambios drásticos en la tendencia -como el evidenciado en 2016- que puedan estar eventualmente relacionados con la dinámica misma del conflicto armado y otras formas de violencia con serias repercusiones sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

<sup>34</sup> Ibid.

## ALERTA TEMPRANA

Tasa de deserción intra-anual del sector oficial

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017



Fuente: Terridata - DNP.


Finalmente, cabe anotar que la población sisbenizada en el municipio de Bello para 2017 era de 320.458 personas; tan solo el 64% se encuentra dentro de la encuesta que tiene cerca de 304.000 validados para la época. En materia de aseguramiento al sistema de salud, para el año 2017 Bello reportaba una cobertura de 305.077 personas en régimen subsidiado, 91.591 en régimen contributivo y 4.713 personas en regímenes especiales, son cerca de 400.000 personas, que no dan cuenta de cerca de 90.000 habitantes, teniendo en cuenta las proyecciones del Censo 2005 a 2019 ni de los resultados del censo de 2018. Este factor, sin duda, contrasta con los indicadores de desarrollo económico referidos con anterioridad y supone, por demás, una vulnerabilidad elevada de dicha población ante la constante ocurrencia de atentados contra la vida e integridad personal que tienen lugar en las zonas focalizadas en riesgo.

### 3. Los problemas socioeconómicos en los asentamientos informales

Las cerca de 50.000 víctimas de desplazamiento forzado que han llegado al municipio de Bello, se han ubicado principalmente en los 22 asentamientos informales referidos. No obstante, son los asentamientos de ubicados en Granizal y Nuevo Jerusalén los más grandes y que pueden albergar 35.000 personas del total de esta población, seguidos por los asentamientos de La Gabriela, Hato Viejo y La Primavera que reúnen, entre los tres, cerca de 10.000 personas. Si bien el municipio de Bello tiene una buena cobertura en servicios básicos y en conectividad en vías y comunicaciones digitales en sus zonas formalizadas, la población asentada en este tipo de asentamientos está por fuera de una oferta institucional necesaria para el ejercicio de sus derechos.

Las necesidades básicas de esta población son un caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales sigan manteniendo el control territorial y poblacional y para que se sigan vinculando niños y adolescentes que no encuentran alternativas y que reproducen los



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


círculos de pobreza y violencia que ha padecido sus abuelos y sus padres. Por eso esta se trata de la comunidad más vulnerable que existe en el municipio y en donde se debe priorizar una intervención integral del Estado en términos de seguridad humana y en clave de goce efectivo de derechos.

En el año 2015 la Alcaldía de Bello, con el apoyo financiero de la Unión Europea, construyó de forma participativa los Planes de Integración Local, en cuatro de los principales asentamientos informales de este municipio: Granizal, Nuevo Jerusalén, Hato Viejo y La Gabriela. Aunque cada asentamiento cuenta con su propio plan sobre sus necesidades particulares, en términos generales hay una demanda muy clara de: formalización de los asentamientos y de la propiedad particular de las viviendas, acceso a agua potable por redes fijas, conexión a energía eléctrica segura, alcantarillado cubierto y sitio de conducción de aguas negras, alumbrado eléctrico, mejoramiento de vías de acceso, mayor cercanía de las instituciones educativas, mitigación de riesgos ambientales y geológicos, ampliación de cuadrantes de policía y presencia mayor y permanente de la fuerza pública, alternativas de trabajo para los jóvenes, entre otras.

Sin embargo, los planes de integración local quedaron en su etapa de formulación participativa y ha sido mínimo su nivel de implementación. Estos instrumentos de planificación local han sido valiosos por su componente participativo y porque permitirían avanzar en la garantía de derechos fundamentales. En ellos, la Administración de Bello y otras entidades competentes cuentan con una herramienta que puede generar capacidades de desarrollo y de inclusión en la ciudad de estas comunidades que tienen una calidad de vida muy precaria y una brecha social elevada frente a los nuevos residentes de las urbanizaciones de clase media de la centralidad.

En esa medida, se considera que sería importante avanzar en acciones de formalización y acceso a servicios públicos rápidamente, no solo debido a las órdenes de los fallos de las acciones populares, sino también para evitar las presiones que implicaría la discusión de un nuevo POT. Varios asentamientos de la vereda Granizal son suelo de expansión urbana y eventualmente podrían ser regularizados; sin embargo, la situación del asentamiento Nuevo Jerusalén es más compleja, por las condiciones adversas del suelo en la mayor parte de su territorio. Pese a ello, a estas familias también se les debe dar la solución de una vivienda digna, según lo dispuesto por la justicia administrativa.

El otro elemento de vulnerabilidad importante tiene relación con la ubicación geográfica de estos asentamientos informales, como Granizal y Nuevo Jerusalén, que permiten la movilidad hacia otras regiones del país. Mientras estos corredores sean importantes para la movilidad de la ilegalidad, y no se asegure una presencia estatal integral en su territorio, estas comunidades seguirán siendo vulnerables al control de actores armados. Por lo tanto, dichas poblaciones reclaman más presencia de fuerza pública, tanto de cuadrantes de la policía como de bases militares que impidan la movilidad en las rutas rurales, pero que respeten y aseguren la plena vigencia de los Derechos Humanos en el territorio.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

***b. Capacidades y vulnerabilidades institucionales en materia de prevención y protección***

En materia pie de fuerza permanente, el municipio de Bello dispone de un recurso limitado. Tan solo 230 agentes de policía están asignados de tiempo completo a la Estación de Policía de ese municipio. Incluyendo los turnos y personal transitorio de baja, 126 están disponibles para los 21 cuadrantes de que dispone el municipio: esto es, 42 policías se encargan de la seguridad ciudadana de cerca de medio millón de personas por cada turno de una hora.


La presencia del Ejército Nacional en zona rural también es limitada. En el municipio, se encuentra asentado el Batallón Pedro Nel Ospina, pero su especialidad es la ingeniería, por lo que el número de efectivos destinados para realizar labores el patrullaje en corredores de movilidad de la ilegalidad es bastante limitado, aunque los pobladores de sectores como Granizal y Nuevo Jerusalén manifiestan que, aunque de forma intermitente, observan movimiento de soldados en las zonas altas.

Cabe anotar que, en virtud del fallo de la Acción Popular de Nuevo Jerusalén - El Cortado, la IV Brigada estudia la viabilidad de la instalación de una base militar en la zona.

No obstante, en el marco de la agudización de la actual confrontación entre estructuras ilegales, el Ministro de Defensa anunció en el Consejo Extraordinario de Seguridad llevado a cabo el 16 de abril del presente año, que reforzaría el pie de fuerza con 280 efectivos transitorios para el Valle de Aburrá, sin precisar cuántos llegarían específicamente a Bello. Según su dicho, en ese total se incluiría un porcentaje importante de efectivos dedicados a labores de contrainteligencia, tomando en cuenta las denuncias de la connivencia de algunos integrantes de la fuerza pública con integrantes de estructuras ilegales. Se estima que, para el mes de mayo, habrían llegado 360 efectivos adicionales con el propósito de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Bello y el norte del Valle de Aburrá de forma transitoria, y que, en los meses siguientes, varios grupos con tareas específicas apoyaban el número de unidades ya incrementado.

A pesar de sus limitaciones presupuestales, el municipio de Bello ha venido haciendo una importante inversión en el circuito cerrado de cámaras de seguridad, disponiendo de 205 unidades, que cuentan con el apoyo del fondo de seguridad del Ministerio del Interior. Además de la dotación en medios de movilidad y combustible para la fuerza pública.

En materia de prevención y protección la Alcaldía de Bello también viene implementando unas acciones muy importantes que han logrado generar impactos significativos en la población destinatarias. Una de las principales estrategias de prevención y protección es la Casa de Justicia, ubicada en Niquía, precisamente en el corazón de la conflictividad violenta actual. En la Casa de Justicia de Niquía también hay presencia de la Fiscalía General de la Nación, la aspiración de la Administración Municipal de Bello es que allí se pueda instalar un Centro de Atención Penal Integral -CAPI- que pueda acercar los servicios de la justicia a la comunidad.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

La Administración ya dispone de recursos para ampliar el programa a dos casas satélites en dos sectores con muchas necesidades como lo son París y La Gabriela, para lo cual cuenta con un equipo interdisciplinario en cada sede, consistente en Inspector de Policía, comisaría de familia, equipo sicosocial adicional al de la comisaría, conciliadores en equidad y asesores jurídicos.

Desde la Casa de Justicia de Niquía se vienen desarrollando programas de prevención del reclutamiento, uso y/o utilización de NNA con un significativo impacto en esta población como el proyecto de mediación escolar que ya ha graduado 800 niños en mediación, impactando positivamente el resto del ambiente familiar. En asocio con la Consejería Presidencial de los DDHH, también ejecutan el proyecto *Mambrú no fue a la guerra: Es otro cuento*, que tiene un énfasis directo en prevenir la vinculación de NNA con grupos armados. Cerca de 350 millones de pesos invierte la Alcaldía de Bello en prevención dirigidos a NNA, que con más recursos podrían ampliarse hacia más beneficiarios en más territorios.


El municipio de Bello cuenta también con su plan de prevención y plan de contingencia, de que trata la Ley 1448 de 2011. No obstante, estos planes se vencen en el presente año, haciéndose necesaria desde ya su actualización y las apropiaciones presupuestales respectivas para el año 2020.

Cabe resaltar también que el municipio de Bello no cuenta con un sistema de información que le permita hacer un seguimiento permanente al comportamiento del delito y a otras conductas vulneratorias de los DDHH, lo cual se configura en una dificultad al momento de disponer de información que le permita tomar decisiones en materia de políticas de protección de DDHH, seguridad ciudadana y convivencia.

\* \* \*

Por lo referido, se considera que los riesgos advertidos son ALTOS y se emite la presente Alerta Temprana con el fin de impulsar la acción preventiva del Estado, y con ello salvaguardar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personales, las libertades civiles y políticas de los/as ciudadanos de Bello y evitar la ocurrencia de posibles infracciones al DIH.

Tomando en cuenta las particularidades del contexto de amenaza descrito mediante la presente, conviene a la acción institucional adoptar en su proceder un enfoque de seguridad humana y una mirada amplia de los fenómenos de violencia y del conflicto armado que confluyen en este estratégico territorio del Norte del Valle de Aburrá y que progresivamente pueden exacerbar el escenario de violaciones masivas a los derechos humanos hacia zonas que, en la actualidad no comportan rasgos de disputa armada. Como bien refiere la Corte Constitucional, en algunos escenarios, aun cuando ciertas conductas violentas puedan clasificarse objetivamente como parte del conflicto armado interno y otras tantas puedan encontrarse por fuera de este al constituirse acciones de delincuencia común, “en el medio existen zonas grises, que no es posible predeterminedar de antemano, pero en relación con las cuales sí es posible señalar que no cabe una exclusión *a priori*,

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

con base en una calificación meramente formal, y que en el análisis de cada caso debe procederse, [...] con un criterio que tienda a proteger a las víctimas”<sup>35</sup>.

En todo caso y conforme el enfoque de seguridad humana que orienta la presente advertencia, se estima que no será posible la superación de las vulnerabilidades territoriales, sociales o económicas que aquejan a las comunidades en riesgo, ni la mitigación del contexto de amenaza, si el accionar institucional no desborda el mero componente disuasivo de la Fuerza Pública. La prevención y superación efectiva de las graves vulneraciones a los Derechos Humanos que aquejan a la población civil de estos sectores Bello sólo será posible si se asegura el ejercicio de su ciudadanía en términos de la garantía real de sus derechos fundamentales.

#### NIVEL DEL RIESGO:

ALTO

☒

MEDIO

☐

BAJO

☐

## AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS


#### AUTORIDADES CIVILES:

Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de Justicia; Oficina del Alto Comisionado para la Paz; Unidad Nacional de Protección (UNP); Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Prosperidad Social; Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Empresas Públicas de Medellín (EPM); Gobernación de Antioquia; Alcaldía de Bello; Fiscalía General de la Nación; Personería de Bello; Procuraduría Regional Antioquia.

#### FUERZA PÚBLICA:

- Ministerio de Defensa.
- Ejército Nacional, VII División, IV Brigada.
- Policía Nacional, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

<sup>35</sup> Corte Constitucional, *Sentencia C-781/12*, Magistrada Sustanciadora María Victoria Calle Correa.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

## RECOMENDACIONES

La presente Alerta Temprana se emite bajo los presupuestos del Decreto 2124 de 2017. Tiene por objeto activar el Sistema de Prevención y Reacción Rápida para el municipio de Bello, ante los riesgos y amenazas de vulneración a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al DIH, derivados de la presencia y actividad de grupos armados ilegales y de latentes condiciones de vulnerabilidad sociales, institucionales y territoriales.

Por lo tanto, se le solicita a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que lidera el Ministerio del Interior, la adopción de medidas integrales y efectivas para disuadir, superar o mitigar el riesgo, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos de la población civil y bajo el presupuesto de que toda acción debe implementarse en función de un enfoque de seguridad humana. En especial se recomienda:


1. Al **Ministerio del Interior**, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, dar trámite inmediato de la presente Alerta Temprana ante las autoridades concernidas en cada una de sus recomendaciones, con el propósito de que se adopten medidas urgentes y preferentes en materia de prevención y de protección integral a cada uno de los grupos sociales vulnerables ante los escenarios de riesgo advertidos. Particularmente, coordinar e impulsar medidas de prevención y reacción rápida ante cada uno de los factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para Bello.
2. Al **Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Departamento de Policía del Valle de Aburrá**, ampliar de forma permanente el número de efectivos disponibles para la Estación de Policía del Municipio de Bello, en sus diferentes especialidades, priorizando la ampliación del programa de seguridad ciudadana por cuadrantes.

En este mismo orden, informar sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Consejo de Seguridad Extraordinario desarrollado el 16 de abril de la presente anualidad relacionado con el aumento de número de efectivos adicionales de la Fuerza Pública que se han dispuesto para el municipio de Bello.

Se insta a valorar para la vigencia fiscal de 2020, el incremento de los recursos humanos y logísticos de la Policía y el Ejército con el propósito de que puedan ejercer presencia permanente en los territorios de mayor riesgo, particularmente en los sectores periféricos de Bello citados en la presente Alerta.


3. Al **Ministerio de Defensa y la IV Brigada del Ejército Nacional**, implementar acciones dirigidas específicamente al ejercicio del control territorial de zona rural del municipio de Bello, en particular, en los corredores rurales de movilidad de la ilegalidad adyacentes a las veredas del Corregimiento de San Félix, la vereda Potrerito especialmente en el asentamiento de Nuevo Jerusalén y la vereda de Granizal, con pleno arreglo al respeto de los derechos de la población civil. Para tal efecto, y con el



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

ánimo de asegurar la sostenibilidad de sus intervención, se les solicita gestionar los recursos humanos y logísticos suficientes a que hubiere lugar.

4. A la **Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación -en sus niveles centrales**-, en el marco de los ejes nodales dispuestos en sus Sistemas i) Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y de ii) Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana, definir un plan especializado para el desmantelamiento y afectación integral y estructural de todas las estructuras, grupos y organizaciones delictivas que son identificadas como fuente de amenaza en la presente Alerta. Conforme lo dispuesto en dicho Sistema, se insta a la Policía y a la Fiscalía General a incorporar en dicho plan acciones de alcance subregional (Valle de Aburrá), regional (Antioquia), nacional (hacia Cundinamarca, Bogotá y otros departamentos) y transnacional, con el fin de desvertebrar todos los eslabones y nodos de las redes que comprenden sus economías ilegales, y que fundamenta el ejercicio de la violencia en contra de la población.
5. Al **Alto Comisionado para la paz**, en su función de secretaría técnica de la **Comisión de Garantías de Seguridad**, valorar las acciones orientadas a la desarticulación de los grupos armados ilegales señalados en el municipio de Bello, en el marco del Plan de Acción Permanente Contra Organizaciones Criminales (PAPCOC). Se insta a realizar una sesión territorial que permita valorar las garantías de seguridad en la zona, así como evaluar el impacto de las medidas adoptadas en la sesión territorial de 19 de julio de 2018 en la ciudad de Medellín, donde se atendió la situación de seguridad del Valle de Aburrá entre otras zonas.
6. A la **Fiscalía General de la Nación y la SIJÍN de la Policía Nacional**, ampliar su personal de policía judicial para emprender y apoyar las investigaciones necesarias para lograr un desmantelamiento efectivo de las estructuras armadas ilegales de Bello y el esclarecimiento de los delitos que se han cometido contra la población civil.  
  
Asimismo, implementar un plan especial de investigación dirigido a esclarecer la posible participación de estructuras armadas ilegales, funcionarios/as públicos e inversionistas privados en las actividades y las rentas ilícitas derivadas de exacciones a la construcción formal y de venta de lotes ilegales en zonas de urbanización prohibida en el municipio de Bello.
7. A los **Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA)**, adscritos al Ejército y al Departamento de Policía de Antioquia, realizar campañas periódicas de divulgación de las rutas de atención a víctimas de extorsión y el secuestro y promoción de la denuncia. Así mismo, se recomienda la formulación de una estrategia con impacto regional en la subregión del Valle de Aburrá, tendiente a la prevención de la extorsión, el incentivo a la denuncia de dichas conductas e impulso a las investigaciones respectivas.
8. A la **Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)** y la **Consejería Presidencial para los Derechos Humanos**, adaptar e implementar sus programas y proyectos orientados a la prevención de la vinculación de niños, niñas y adolescentes como *Mambrú No va a la Guerra: Ese es Otro Cuento*, y la Formación de Gestores de


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Convivencia en los sectores en donde hay una agudización del contexto de amenaza gestado por los actores armados ilegales, específicamente en las Comunas 4, 6, 7 y 8 de Bello y los asentamientos de Nuevo Jerusalén y Granizal.

9. A la **Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia**, apoyar técnica y presupuestalmente a la Alcaldía del municipio de Bello en la ampliación del Programa de Casas de Justicia a los sectores de París y La Gabriela, dotándole de las herramientas suficientes para que todos los componentes desarrollados en la Casa de Justicia sean llevados a estas sedes satélites. Para tal efecto, se recomienda que, en virtud de las atribuciones que le han sido conferidas mediante el artículo 2.2.4.1.6 del Decreto 1069 de 2015, coordine la consecución de recursos dirigidos a este programa.

Sobre el particular, se insta a las autoridades concernidas a: i) Remitir a la Defensoría del Pueblo un balance sobre el estado de ejecución de cada Plan de Integración; ii) Continuar la ejecución de las actividades incluidas en los Planes para el año en curso y agilizar la implementación de aquellas de reporten algún tipo de retraso; iii) definir las acciones a implementar desde el año 2020 e iniciar las gestiones de apropiación presupuestal para llevar a cabo dichas labores de conformidad con dicha vigencia fiscal.

10. A la **Dirección Territorial Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**, la **Gobernación de Antioquia** y la **Alcaldía de Bello**, incrementar su oferta individual de programas de protección a la segunda infancia y adolescencia, como clubes juveniles, actividades culturales y deportivos, aprovechamiento del tiempo libre y otras acciones de protección que eviten la vinculación de NNA a las estructuras armadas ilegales. Para tal efecto, se insta a dichas entidades a definir acciones específicas dirigidas a NNA que habiten específicamente en las Comunas 4, 6, 7 y 8, la vereda Granizal y el asentamiento de Nuevo Jerusalén - Cortado en la Vereda Potrerito.
11. A la **Dirección Territorial Antioquia del ICBF**, implementar específicamente su programa Generaciones con Bienestar con niños, niñas y adolescentes que habitan en las Comunas 4, 6, 7, y 8 de Bello y los asentamientos informales que se ubican en Granizal y Nuevo Jerusalén.
12. A la **Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH**, como secretaria técnica de la CIPRUNNA, a la Dirección Territorial Antioquia del ICBF formular e implementar un plan de divulgación de las rutas de prevención del reclutamiento forzado y uso ilícito de NNA al interior de los planteles educativos oficiales y no oficiales, ubicados en las Comunas 4, 6, 7 y 8, veredas Granizal y asentamiento Nuevo Jerusalén.
13. A la **Alcaldía de Bello** y a **Empresas Públicas de Medellín (EPM)**, formular e iniciar la implementación de un plan de contingencia en el cual se consignent las acciones, cronogramas y recursos específicos para acatar las órdenes de la justicia administrativa sobre la garantía de derechos económicos sociales y culturales, de la comunidad de la vereda Granizal, particularmente lo dispuesto sobre vivienda digna y acceso a los servicios básicos como la energía y el agua, prestando un servicio de calidad, conforme

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

lo dispuesto en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, el pasado 14 de marzo de 2019.

Para llevar a cabo esta labor, se les insta a iniciar las gestiones de apropiación presupuestal una vez recibida la presente Alerta, con el fin de asegurar su ejecución en la vigencia fiscal de 2020 y el cumplimiento prioritario de las órdenes allí consagradas.

14. A la **Unidad Nacional de Protección y la Alcaldía de Bello**, realizar actividades de capacitación en autoprotección, en especial con los líderes comunitarios de Granizal, quienes han expuestos mayores riesgos sobre el ejercicio de sus derechos de vida, libertad e integridad. Asimismo, emprender acciones de pedagogía de sus rutas individuales y colectivas y demás oferta en materia de protección, con líderes/as comunales y sociales y defensores/as de Derechos Humanos y activar las medidas de su competencia, tomando en consideración los escenarios referidos en la presente Alerta Temprana.


15. A la **Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas**, en tanto coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) articular y hacer un seguimiento riguroso y pormenorizado a las ejecución de las acciones de integración local de las comunidades en situación de desplazamiento forzado asentadas en Granizal, Nuevo Jerusalén, Hato Viejo y Gabriela. Para tal efecto, se le solicita informar a la Defensoría del Pueblo los resultados de dicha labor.

Así mismo, se le solicita que, en ese cometido, coordine y verifique con la **Alcaldía Municipal de Bello, la Gobernación de Antioquia y Prosperidad Social**, las acciones institucionales que son debidas para la garantía del principio de seguridad en el marco de los procesos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento forzado.

Finalmente, se insta a las autoridades concernidas a: i) Remitir a la Defensoría del Pueblo un balance sobre el estado de ejecución de cada Plan de Integración; ii) Continuar la ejecución de las actividades incluidas en los Planes para el año en curso y agilizar la implementación de aquellas de reporten algún tipo de retraso; iii) definir las acciones a implementar desde el año 2020 e iniciar las gestiones de apropiación presupuestal para llevar a cabo dichas labores e conformidad con dicha vigencia fiscal.

16. A la **Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior**, diseñar un plan de fortalecimiento técnico a la Alcaldía de Bello a implementarse conjuntamente en los primeros meses de 2020, en lo que corresponde a la formulación de nuevos planes integrales de Prevención y Contingencia, de conformidad con los escenarios de riesgo de que trata la presente Alerta Temprana.

17. A la **Alcaldía de Bello**, construir directamente o por intermedio de alianzas con otras entidades como las Alcaldías del Área Metropolitana, sistemas de seguimiento e información sobre el comportamiento de la criminalidad organizada y otras violencias,


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

que le permitan a la Administración adoptar, de manera técnica, oportuna y fundamentada, políticas de seguridad y protección ciudadana.

18. A la **Alcaldía de Bello** y demás entidades requeridas, el cumplimiento efectivo de los fallos de acciones populares sobre asentamientos como Granizal y Nuevo Jerusalén, conforme lo dispuesto en el fallo del Juzgado 26 Administrativo de Medellín - Radicado 2010-00135. Segunda instancia Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y el fallo proferido el 14 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad frente a la población que habita en el asentamiento de Nuevo Granizal.
19. A la **Policía Metropolitana del Valle de Aburrá** por medio de su grupo de **Infancia y Adolescencia**, diseñar una estrategia de prevención del reclutamiento y uso ilícito de NNA, acompañamiento y protección a los estudiantes de instituciones educativas ubicadas en zonas de alta conflictividad armada en el municipio de Bello, adoptando siempre un enfoque de derechos humanos y el principio de interés superior del niño/a.
20. Al **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**, en concurso con la Alcaldía de Bello ampliar su oferta de capacitación técnica, tecnológica y las estrategias que permitan el crecimiento del mercado laboral, específicamente a favor de población asentada en las Comunas 4, 6, 7 y 8, la vereda Granizal y los asentamientos informales referidos en la presente Alerta.
21. Al **Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)** socializar, ante la Alcaldía de Bello y líderes/as comunitarios de los veintidós (22) asentamientos no formalizados existentes en el municipio, los resultados cuantitativos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 obtenidos para esos territorios, con datos desagregados sobre el número de personas y hogares que allí se encuentran.

Ante las inquietudes comunitarias e institucionales existentes sobre presuntos sub-registros en el levantamiento de dicha información -importante para la formulación de políticas públicas para la superación de las condiciones de vulnerabilidad que afrontan dichas comunidades- se insta a sostener espacios de diálogo e intercambio conjunto respecto de esas materias.

22. Al **Ministerio de Defensa, Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y IV Brigada del Ejército Nacional**, establecer puestos de registro y control en las vías de acceso a Bello, tanto urbanas en vías nacionales como en rutas rurales utilizadas por organizaciones armadas ilegales.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	<b>ALERTA TEMPRANA</b>	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

23. Finalmente, se les solicita a todas las autoridades concernidas en esta Alerta Temprana, a la Fuerza Pública y organismos de seguridad del Estado, en atención a los artículos 282 y 283 de la Constitución política del 91, y a los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992, informar a la mayor brevedad y periódicamente (mensualmente) a la Defensoría del Pueblo las actuaciones y medidas derivadas de la presente Alerta Temprana y sus alcances con respecto a la situación de riesgo descrita.

Para los efectos pertinentes, se les solicita remitir sus respuestas a los correos electrónicos [jeguzman@defensoria.gov.co](mailto:jeguzman@defensoria.gov.co) y [fegaitan@defensoria.gov.co](mailto:fegaitan@defensoria.gov.co) o a la Dirección Postal: Carrera 9 No 16-21 de Bogotá D.C.

ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA**  
Defensor del Pueblo

Revisó y Aprobó: Mateo Gómez Vásquez  
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de DDHH y DIH  
Archivado en: Alertas Tempranas 2019  
Consecutivo Dependencia: 404001-0993/19